CARTAS DE ACTUALIDAD

CAMBIADAS

ENTRE EL SEÑOR ANTONIO F. GUNDIÁN

Y

LUIS ALDUNATE

SANTIAGO DE CHILE
IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN ROMA
19—BANDERA—19

1894

CARTAS DE ACTUALIDAD

(Del Agricultor, de Cauquenes)

Cauquenes, mayo 15 de 1894.

Señor don Luis Aldunate.

Santiago.

Muy señor mío:

Las bajas del cambio alcanzan ya las proporciones de un tremendo azote, más aterrador que el del cólera en aquellos tiempos en que lo anunciaba la presencia del Judío Errante.

¿Qué se ha hecho, entre tanto, la autorizada y convincente palabra de Ud. en la hora suprema de las angustias que estamos ya tocando?

Siento la necesidad de oirla resonar de nuevo en la prensa, ya que no me es dado á mí hacerle un eco de siquiera mediana eficacia. Tengo la íntima convicción de que es Ud. el único capaz de contrarrestar con éxito ese inconcebible empecinamiento de los conversionistas, que no retroceden ni aún en presencia de las pavorosas ruinas que están ya produciendo. Me duele el alma con-

templar la aproximación de la catástrofe y no hallarme en la posición de Ud. con capacidad moral y aún material de oponerle un dique insalvable.

¡Cuánto no se reirán los agiotistas de ese empecinamiento doctrinario y musulmán, que les proporciona el medio de multiplicar al infinito su negocio, concentrando en sus cajas así las fortunas de los ricos, como los frutos de la industria y hasta el pan mismo del miserable proletario!

¿Cómo es que no ve ya todo el mundo que este desastre no es más que efecto inmediato y necesario de las mal llamadas leyes de conversión?

Esas leyes, ordenando la acumulación de oro en las arcas públicas, hacen del Fisco el más fuerte competidor en la demanda de las escasísimas letras que realiza nuestra depreciada producción exportable y disponiendo en estas circunstancias la venta de las salitreras, aumenta esa competencia en términos abrumadores, pues sólo podrá presentarse á la licitación el que haya reunido el oro ó las letras suficientes con que poderlas pagar.

Hé allí la doble competencia extraordinaria que hace encarecer el cambio más y más cada día; y que ofrece, en consecuencia, á los agiotistas la más amplia seguridad de revender siempre con toda la ganancia que codicien.

Tómese además en cuenta que esta formidable competencia del Estado, es el remedio que se adopta para hacer frente á la crisis natural de la insuficiencia de letras en que se traduce la abrumadora depreciación de nuestros principales artículos de retorno, la plata, el cobre y el trigo y se comprenderá cuánta es la aberración de los que se obstinan en radicar el mal en la desconfianza del público respecto al pago en oro de los billetes del Estado.

Pero no esto solo. Al mismo tiempo de establecerse tan extraña como absurda competencia en la demanda

de letras, se ha hecho todavía cuanto es imaginable en el sentido de restrinjir su ya más que suficiente oferta.

Se han multiplicado, en efecto, los costos de nuestra producción exportable, ya naturalmente acrecidos con la carestía misma del cambio, hasta casi igualar si no superar los reducidos precios que en el día alcanza: 1.° con el alza en el interés del dinero y la forzada restricción del crédito; 2.° con la ciega y general agravación en los derechos de aduana y en los fletes de los ferrocarriles, con los que se han hecho inabordables los precios de las maquinarias y demás útiles extranjeros que esa producción requiere, alzándose además el salario del trabajador con el mayor encarecimiento en los artículos de su consumo ordinario; 3.° y por último, hasta con la sin nombre implantación de las nuevas contribuciones municipales, creadas como exprofeso para acabar de oprimir al productor, echándole encima el peso de necesidades que no se conocían, aparte de abrir con ellas el apetito de los empleos que vendrán á ser en las aldeas y villorrios lo que el agio en los grandes centros del comercio.

¡Y hay todavía escritores y publicistas que se atreven á seguir atribuyendo los naturales efectos de tan enormes violaciones de la única ley económica infalible, como de los más obvios preceptos del derecho administrativo, á la pretendida y jamás justificada desconfianza, á la especulación ó el agio, causal agravante á que esas mismas violaciones dan lugar y ¡cosa increíble! hasta á los mismos gritos de angustia de los que viendo cernerse sobre nuestras cabezas la amenazante espada de Damocles, nos atrevemos siquiera á señalar ese cúmulo de enormidades, pidiendo encarecidamente un poco de cordura y buen sentido.

¡Ay del país! el día en que recomience el acaparamiento del billete fiscal, elevando aún más el interés del dinero, ó el día en que procedan los Bancos al retiro de sus

emisiones, agotando definitivamente el crédito, ese único recurso de trabajo y de recobro en un país que ha perdido sus capitales monetarios y á quien se le ultima arrancándole con entrañas de judío hasta la última gota de su savia, para acumular un tesoro inútil que al fin tendrá que desparramarse á los cuatro vientos, y que se mantiene entretanto, con enerjías de avaro, impasible y sordo á los gritos del hambre y de la desesperación general.

Por fortuna, no es aún tarde para retroceder. Aún podría salvarse al país de ese tremendo día de la justicia popular, que tan temerariamente provoca el conversionismo doctrinario, aliado, quizá inconsciente, del agiotismo y de la opresión del país.

Se puede aún probar con el hecho, como cierto sabio de la antigüedad probaba el movimiento, que la causa real y positiva de la baja del cambio no radica en el crédito ó las finanzas del Estado, sino en el comercio y en la producción del país: ó sea que nuestra actual crisis es exclusivamente comercial, sin tener carácter de financiera ni aún en la más mínima parte, apesar del curso forzoso, que es uno de los signos de estas crisis, pues si éste existe, no es porque el Estado no tenga medios de pagar, sino porque el país no se encuentra en estado de recibir el pago en una especie encarecida que le sería imposible retener.

Las crisis financieras se curan con sacrificios impuestos al país, al paso que las comerciales requieren el fomento de la producción con todos los auxilios que pueda el Estado suministrarle. Por manera que aplicar á la una los remedios que son propios de la otra es ni más ni menos, que privar del alimento al verdadero enfermo para darlo al que se encuentra en plena salud. Tal es el error en que incurren los conversionistas: esquilman al país, que es el único enfermo, en beneficio de un Fisco que sobrenada en la abundancia y goza, en consecuencia, del

más bien cimentado crédito. Hacen precisamente lo contrario de lo que debería hacerse; y de allí las angustiosas agonías en que el país se encuentra.

La prueba experimental á que me he referido no es otra que el pago efectivo de la deuda del Estado por el billete de curso forzoso, hecho en letras de cambio que es la forma en que le conviene al país recibirlo, reemplazando el billete redimido con papel bancario inconvertible, mientras se obtiene por sus medios naturales el retorno del cambio á la par, en la forma y con las condiciones que indica mi estudio *La Conversión y el Buen sentido*, publicado en este periódico en su número del 1.° de enero del presente año, junto con una carta particular á S. E. el Presidente de la República.

Esa prueba, que pondría desde luego en manos del Gobierno el poder de fijar el cambio en el tipo que á nuestra producción conviniese, podría sin duda hacerse victoriosamente, imponiéndose hasta á la obstinación misma, si esa idea salvadora llegase á obtener el eficaz patrocinio de usted y fuese llevada á las alturas del poder y la opinión en alas de su irrefutable dialéctica.

Eliminada así la idea perturbadora de la desconfianza y la causa primordial de la confusión que se hace de las finanzas del Estado con la capacidad productora del país, como del papel moneda con el papel de crédito, el doctrinarismo quedaría sin duda definitivamente derrotado y no habría ya nadie que se atreviese á desconocer el hecho evidente de no haber otra causa para las bajas naturales del cambio y su consiguiente agravación por el agio, que la reducción habida en los precios de nuestros principales artículos de exportación en los mercados de su consumo. Con esto sólo estaría ya hecha la mitad de la jornada en la difícil tarea de rehacer los capitales que ese fatal doctrinarismo ha hecho ya perder al país. La causa efectiva del mal que nos aqueja no podría ser

ya desconocida, y debiendo presumirse que ella es un hecho accidental, pues se debe á las facilidades y economía con que países más extensos y más adelantados nos han de hacer en todo caso permanente competencia, saltará á la vista la necesidad, no sólo de protejer decididamente nuestra producción actual, sino que también de crear la industria fabril, siquiera fuese en la proporción de bastarnos á nosotros mismos y emanciparnos de la ruinosa servidumbre á que nos tiene encadenados la necesidad de ocurrir al extranjero para la casi totalidad de nuestros consumos.

Decidida protección aduanera, primas de implantación, fletes baratos y crédito fácil y á bajo interés como podría obtenerse de los bancos con sólo reintegrarlos en el poder emisor que les acordaba la primitiva ley de 1860, son, entre muchos otros apropiados á los casos particulares, los medios que indica el más vulgar sentido común, aparte de la transformación de la instrucción pública en práctica y técnica, único medio de difundir la aptitud industrial y el espíritu de empresa.

Hé allí temas que no me es dado á mí explayar y en que su vasta ciencia le llevaría á la gloria de convertirse en el primero y más benéfico de los servidores del país.

Acepte usted, entre tanto, los sentimientos de consideración y alta estima, con que me subscribo de usted A. y S. S.

ANTONIO F. GUNDIÁN.

I

Santiago, junio 19 de 1894.

Señor Antonio F. Gundián.

Cauquenes.

Señor de mi distinguida consideración:

Con notable atraso vino á mis manos el núm. 127 del *Agricultor* de esa ciudad, en el cual se registra la interesante carta que usted se ha servido dirigirme desde las columnas de esa publicación.

Permítame usted, ante todo, justificarme de la inculpación de poltronería que envuelve su carta citada, por más que en el fondo de ese cargo, se encierren conceptos de excesiva benevolencia y honra para mí.

No he abandonado la dilucidación de los gravísimos problemas de nuestra actualidad económica, por desidia ni por debilitamiento de espíritu público.

He creído, sí, señor Gundián, que esos debates habían tocado ya sus límites útiles.

No hay, en efecto, nuevos elementos para una controversia doctrinal seria y benéfica, en los que usted llama "inconcebibles empecinamientos" de los sustentadores de las leyes del 92 y 93.

Después que el acontecimiento, con sus más brutales

sanciones, ha venido á patentizar los errores de aquel conjunto de arbitrios empíricos, no cabe, en realidad, otra tarea útil, que la de refrescar la memoria de nuestros legisladores con la repetición de los desastres que las tales leyes han causado al país y de los mayores que todavía están por producirse.

Recuerda usted, con acabada oportunidad, el procedimiento del filósofo que probaba el movimiento andando.

También el rumbo del movimiento económico-nacional, se refleja y se prueba, material y dolorosamente, en las profundas brechas abiertas á la fortuna pública por las desgraciadas leyes que venimos combatiendo.

Comience usted por el empréstito externo de agosto del 92, que marcó la fecha inicial del derrumbamiento en el mercado de los cambios.

Siga usted, en seguida, con la emisión de aquellos famosísimos bonos internacionales, que hubo de ser suspendida administrativamente y con flagrante violación de la ley, porque nos colocó, cinco meses después de iniciada, al borde de una bancarrota monetaria.

Anote usted después los abultados guarismos de millones que representan las pérdidas ocasionadas por el recargo de precios en todos los artículos extranjeros de consumo obligado para el país, por la reducción de los valores que constituyen la fortuna mobiliaria nacional, por los gravámenes que el alza de intereses importa para las industrias y por las limitaciones, en fin, que las restricciones forzadas del crédito han causado á la escasa fuerza productiva de la nación.

Este balance, si pudiera traducirse en cifras de mediana exactitud, arrojaría saldos abrumadores para el empirismo dominante.

En el término y como resumen de esta vía de ensayos tan infelices, hallará Ud. el barómetro del cambio marcando siempre temporal.

Y, después de esto, ¿cree Ud. realmente necesario seguir en controversias doctrinales que remedarían á las disputas bizantinas en medio de las cuales sorprendieron y aniquilaron los bárbaros á los romanos del Bajo Imperio?

Fiemos, señor Gundián, sola y exclusivamente, en las imposiciones de los acontecimientos, que si ellos no alumbran á nuestros conductores, sería imperdonable candor atribuir la más nimia importancia á nuestras antiguas y reiteradísimas advertencias y protestas.

Fuera, no obstante, mucho pesimismo, no darse cuenta ni tomar nota de los signos de bonanza que se manifiestan visiblemente en la atmósfera.

Estamos hoy á enorme distancia, por ejemplo, de la época en la cual denunciábamos solos, completamente solos, como un eco aislado y casi extravagante, los contraproducentes resultados que debía acarrearnos el pago en oro de los derechos de aduana.

Cuando intentáramos por primera vez esa demostración, en un opúsculo que vió la luz pública *en septiembre de* 1892, no podíamos imajinar que, dos meses más tarde, es decir, en noviembre de aquel mismo año, se sancionara la medida que impugnábamos con el doble apoyo de la doctrina y de la historia; *por treinta y seis votos contra seis*, en la Cámara de Diputados, y por la semiunanimidad del Senado.

Catorce meses más tarde aún, o sea en enero de este mismo año en curso, se seguía gastando una insistencia incomprensible en mantener el vigor de aquella dañina disposición legal y Ud., que sigue con tan marcado interés la historia de estos sucesos, repararía, por cierto, en las tesis sostenidas por una publicación de elevadísima cuna conversionista, que hacía, á este propósito, las siguientes afirmaciones y declaraciones:

"En vista de las consideraciones que preceden, *creemos*

que es indispensable, para efectuar con éxito la conversión, continuar formando el fondo metálico de la manera establecida por la ley de 31 de mayo de 1893, es decir, *cobrando en oro ó en letras sobre Londres, una parte de los derechos de aduana.*»

Y más adelante:

«El Estado necesita continuar formando su reserva metálica como lo han hecho otros países y, á nuestro juicio, *no debe por razón alguna abandonar su propósito*».

¿Quiere Ud. saber, ahora, cómo es que los acontecimientos pueden más que el dogmatismo más absoluto?

Sírvase Ud. leer, entre otras piezas, el editorial del MERCURIO de 15 del pasado mayo y allí se encontrará Ud. con las siguientes declaraciones:

«Pero, se agrega todavía una medida denunciada como un factor que deprime el cambio internacional».

«Esta medida es la obligación de pagar en oro ó letras el 25% de los derechos de importación.

«Efectivamente, no se puede desconocer que este pedido artificial de letras, tiende á hacer más escasa la provisión de las que necesita el comercio para sus pagos y, por consiguiente, tiende á deprimir el cambio.»

Y después:

«Suspender la recaudación en oro ó letras de este 25% de los derechos de importación, es indudablemente una medida de efectos inmediatos que aliviaría el malestar de la situación y con ello no se perjudicaría en nada el exacto cumplimiento de la ley de conversión para el primer semestre de 1896».

Suponiendo, ahora, que la publicación de enero y el artículo de mayo fueren, cuando menos, debidos á una misma inspiración, ¿habría podido cantarse una palinodia más completa?

Pues bien, ese resultado, que no habríamos conseguido ciertamente en diez años de polémicas, lo produce *la*

imposición de los acontecimientos con sus ineludibles exigencias.

Ya verá Ud. cómo mi fe en los mandatos imperativos *de los hechos*, se justifica y se prueba con *los hechos mismos*.

Sin salir de la órbita de los fenómenos que analizamos puede Ud. anotar cómo es que esa fuerza incontrarestable del acontecimiento, concluyó, en primer término y violentísimamente, con los benditos bonos internacionales y concluye ahora con el pago en oro de los derechos de aduana, medidas ambas fundamentales de las leyes de nuestra referencia que habíamos combatido estéril é inútilmente, desde antes de dictárselas, gastando esfuerzos tan reiterados como infructíferos.

Voy á señalar á Ud., ahora, una tercera *imposición de los hechos*, que agujereará más aún estas parchadísimas leyes que nos ocupan.

Aludimos á la formación, ordenada en ellas, de las reservas metálicas de los bancos.

Vanamente nos habíamos esforzado en demostrar que ese mandato era de imposible cumplimiento y que manteniéndole en vigor no se lograría sino compeler á los bancos al retiro total de sus emisiones.

Y, «la razón no quiere fuerza», como reza el proverbio.

Con cambios al derredor de 12 peniques, era absurdo suponer que los bancos comprasen oro, á cuatrocientos por ciento, para garantía de emisiones que les dan un beneficio máximum de siete por ciento anual.

En consecuencia, insistir en las tales reservas metálicas obligatorias, era ni más ni menos que decretar el retiro forzado del papel bancario. Y ya comprenderá Ud. que el día en que todo el circulante del país hubiere quedado reducido á los veintisiete ó veintiocho millones de pesos de la emisión fiscal, el interés del dinero habría ido al 30%, las transacciones habrían quedado limitadas

á que cada cual comprase la carne de su puchero y la industria nacional se habría extinguido violenta y radicalmente.

Pero, ni con ser tan manifiestas las consecuencias de aquella desacordada medida, que denunciamos é impugnamos desde el primer momento, dejábase de insistir en su mantenimiento más inflexible.

Fué así como mientras sosteníamos, desde abril de 1893, la necesidad de que el Estado hiciera suyas las emisiones bancarias, tanto para prevenir la contingencia de un retiro violento de ese circulante como para concluir con la peligrosa pluralidad de la moneda fiduciaria, se nos contestó, en aquella misma publicación que recordábamos poco há, que pretendíamos convertir al Estado en negociante, prestamista y habilitador de bancos y que, en realidad, en el fondo de nuestro pensamiento se encerraba el propósito de que «*el Estado pagase deudas ajenas.*»

Ya sabe usted que hoy, aquella impugnadísima y recelada idea ha sido oficial y solemnemente prohijada en el Mensaje de S. E. el Presidente de la República.

Observará usted acaso que, exactas como son las conquistas alcanzadas en pro de nuestras comunes aspiraciones, nos hallamos todavía muy distantes de poderlas considerar completas y satisfactorias.

Así es, en efecto, la verdad, pero no olvide usted que todo lo debemos, *única y exclusivamente, á la imposición de los hechos* y que esta propia fuerza concluirá por desmontar, pieza por pieza, toda la armazón del arbitrismo hasta hoy triunfante.

Ni pierda usted tampoco de vista que necesitamos vencer una triple y poderosísima resistencia, formada de errores y preocupaciones arraigadas y fortalecidas después con las avasalladoras y punzantes exigencias del amor propio comprometido.

Se cede penosamente y se cede paso á paso, en semejantes condiciones.

Y cuando la resistencia llega á ser insostenible, se reconoce solamente una parte de la verdad, se fraccionan y se mutilan las ideas para acogerse á transacciones truncas y, por lo mismo, dañosas.

Ejemplos al caso.

Háse aceptado, al fin, la conveniencia de que el Estado haga suyas las emisiones bancarias.

Sabe usted sobradamente que es ésta una medida precautiva de carácter esencialmente transitorio.

Se deben suprimir las emisiones bancarias, sólo mientras dure la inconvertibilidad.

Una vez que volviéramos al régimen del circulante de especies, sería útil y sería hasta indispensable que los bancos auxiliasen al nuevo sistema de circulación por medio de sus billetes que, en tal evento, serían pagaderos al portador y á la vista, *en moneda metálica*. Este elemento de la emisión bancaria, economizaría una suma de circulante metálico que de otra manera debiéramos comprar y pagar al extranjero para satisfacer las exigencias del mercado.

Pues bien, desconociendo el carácter esencialmente transitorio de la medida que analizamos y echando en absoluto olvido su origen y sus fundamentos, se pretende que los bancos paguen al Estado una comisión de tanto por ciento *por el servicio* que este último les prestaría pagando, á su turno, al público, el valor de los billetes emitidos por aquéllos.

Se parte, pues, de un primer error fundamental.

El Estado no pagará el importe de los billetes bancarios que tome á su cargo mediante á esta combinación.

Es obvio que mientras subsista la inconvertibilidad, el público no intentaría cambiar billetes bancarios por fiscales, ya porque á unos y otros sustentaría la misma ga-

rantía, ya porque unos y otros también son indispensables y hasta deficientes como cuantía de circulante.

Bastaría, en consecuencia, con que el Estado estampara su sello en los billetes de la emisión bancaria, para que ambas quedasen en el propio rango, prestando servicios igualmente eficaces.

Ahora, cuando llegue la circulación metálica, no habría tampoco utilidad alguna en que el Estado pagase, efectiva y materialmente, los billetes bancarios, porque en tal caso renacería ipso facto, ó por lo menos debería renacer, el derecho de los bancos á emitir con arreglo á la ley sometiéndose, por cierto, al canje de sus billetes por metálico.

Por este lado no habría motivos ni pretestos que cohonestasen el pago que se exije á los bancos.

Muchísimo menos pudiera ser aceptable que se legitimara la exacción á título de «comisión de garantía» por la responsabilidad que el Estado se echaría á cuestas tomando á su cargo aquellas emisiones durante la inconvertibilidad.

No es exacto que el Estado se imponga responsabilidades por esta causa.

Esas responsabilidades serían previamente cauteladas y garantidas por los bancos emisores, mediante á la entrega efectiva hecha en arcas fiscales de una suma de bonos ó efectos públicos equivalente en valor al monto total de los billetes que pasaran á cargo del Estado.

Se hace pues gala de un fiscalismo ávido cuando se inventan pretestos para cohonestar estas verdaderas exacciones impuestas á la escuálida industria nacional.

Ya basta y sobra con que los bancos renuncien ó se les haga renunciar á los beneficios de sus emisiones, en aras del interés general y por evitar peligros que son propios de la pluralidad de origen de la moneda fiduciaria en el régimen del papel-moneda.

Pero imponerles todavía el pago de una comisión por el servicio que se les hace despojándoles de una de las facultades de que están investidos por la ley y de una de las operaciones más beneficiosas de su giro industrial, es algo que, en realidad, no se comprende y muchísimo menos se justifica.

Ni son tampoco ventajas fiscales alcanzadas con detrimento del interés público general, las que deben discretamente buscarse en la peculiarísima condición económica y financiera de este país.

La única tendencia cuerda y previsora de la política económica, debería ser la de procurar que llegasen á todos y á cada uno de los habitantes del país, las riquezas eventuales y transitorias que el fisco viene recaudando por centenares de millones, mediante á su gratuita coparticipación con la industria salitrera.

Necesitamos, en resumen, enriquecer al país en vez de locupletar las arcas fiscales.

No dan muestras de comprender esta exigencia de nuestra actualidad, los que se proponen hacer del Estado un mercader, como otro cualquiera, compeliéndole á cobrar "comisiones de garantía" á los bancos, es decir, al público, que habría de pagarlas en último término.

Y para justificar estas exacciones, tanto más odiosas cuanto son innecesarias, se tornan en servicios y en favores hasta las mismas expropiaciones impuestas á una industria en beneficio de la comunidad.

De esperar es que se modifiquen estos detalles inaceptables de una idea útil en su fondo.

II

Nada podría añadir á usted hasta este momento, en orden á la suerte que aguarde á las demás disposiciones sustantivas de las leyes que venimos impugnando.

Sabe usted que el mantenimiento íntegro é inflexible de esas leyes, fué hasta enero último «*la base de la política económica del Gobierno,*» según lo expresaron reiteradas declaraciones oficiales.

Entiendo que hoy es aquél un propósito quebrantado.

Es que el terreno ha cedido á los pies de los arbitristas y se sienten despeñados hacia el vacío.

¿Recuerda usted la grita que se levantó en octubre de 1893, ante las *Indicaciones de la Balanza Comercial*?

¿No hace usted memoria de que se comenzó por denegar en absoluto la base científica de aquella tesis que se apellidaba «teoría fantástica, caprichosa, arbitraria?»

¿Ha olvidado usted que florecieron, por aquella época, legiones de economistas y publicistas que proclamaban la radical falsedad de esa doctrina?

Para qué recordar todavía el escándalo mayúsculo y el descomunal espanto que produjo el cálculo de un saldo positivo de £ 5.000,000 en contra de la balanza comercial de este país en 1892.

Pues bien, lo que es hoy por hoy, la teoría «fantástica y desautorizada», la proclaman de todos lados, como de propia cosecha, y son poquísimos los espíritus bastante

candorosos que sigan creyendo que nuestros desastres económicos, que el cambio á 12d, que el alquiler de los capitales al diez por ciento, que las restriciones cada día más apretadas del crédito y, por fin, que la anemia del comercio y de la industria nacional; se deban á la especulación, á la desconfianza y al papel moneda.

En fuerza de repetir todas esas trivialidades, se ha atraído hacia ellas el espíritu de análisis y el buen sentido público ha visto que, en el fondo de tales asertos, no hay sino un recurso del empirismo para explicar fenómenos que no puede ó no quiere comprender.

Es una gran conquista, señor Gundián, la generalización de las ideas que nos ha cabido el honor de sustentar, porque de ellas fluyen incontrovertiblemente todas las conclusiones que hemos venido sosteniendo en este prolongadísimo debate.

Quienes reconozcan que el origen de nuestras dificultades económicas arranca fundamentalmente de la escasez y del bajo precio de los productos exportables, tienen que reconocer, por el mismo hecho, la absoluta ineficacia y aún la contraproducencia de llenar estos vacíos mediante á la compra, hecha al extranjero, de una gruesa suma de oro destinada á servirnos de circulante.

Es obvio que el valor de esta mercadería acrecerá el monto de los saldos deudores del intercambio.

Es manifiesto, en seguida, que dadas las cotizaciones actuales del cambio internacional, el comercio echará mano de la nueva moneda de 24 peniques para pagar deudas que hoy se están sirviendo con letras compradas a 12 d.

Es así mismo, de certidumbre matemática, que estos revesados procedimientos no pueden llevarnos a la *conversión* del circulante fiduciario por el metálico, sino á un efímero y ruinoso canje del papel de 12, 14 o 15 d, por moneda de 24.

Conocemos de antemano, por experiencias de estricta analogía, el efecto que pudiera producir este canje, sobre el tipo de los cambios.

Las sumas de papel que alcanzaran á presentarse al mostrador de los canjes, levantarían momentáneamente los cambios, mientras durase la salida de la moneda, como aconteció á fines de 1892, con la venta de las letras pagaderas con el empréstito de £ 1.800,000; para caer en seguida, brusca i violentamente, hasta tipos que hoy no imaginaríamos verosímiles.

Y después que nos quedásemos sin papel y sin moneda, la tormenta acabaría de desencadenarse hasta que llegaran, en condiciones de ruina, las nuevas é infalibles emisiones de papel.

Por lo que atañe á los efectos de las leyes que analizamos sobre el mercado monetario *interno*, son ciegos voluntarios los que no quieren divisarles.

Si hoy con cincuenta millones de pesos, más ó menos, de circulante fiduciario, fiscal y particular, tenemos intereses al diez por ciento y estagnación comercial, ¿qué crédito pudiera quedar en pie, qué intereses devengarían los capitales el día en que todo el circulante quedase reducido á los veintisiete ó veintiocho millones de pesos de moneda de 24 peniques?

Y después cuando esta propia, estrechísima suma de circulante comenzara á emigrar, se admitirá, cuando menos, que veríamos reproducirse en vasta escala el fenómeno que aqueja hoy á los mercados del Perú, en los cuales la salida de *un millón y medio de soles plata* llevados á Centro América, ha producido una alza en el alquiler de los capitales, desde 12 hasta 18 por ciento.

Se comprenderá que si los soles del Perú se marchan hacia otros mercados en donde adquieren una mayor cotización de *uno y medio por ciento*, los pesos de oro de 24 peniques de Chile se vaciarían íntegra y violentamente

sobre las plazas acreedoras del país para cancelar *con ciento por ciento de recargo*, deudas que hoy se están pagando *con trescientos por ciento de aumento sobre el valor del papel.*

¿Qué tipo de intereses sería necesario que rigiese en nuestros mercados, para retener una moneda que tan enormes utilidades produciría á sus exportadores?

No habría usura alguna que fuese compensacion proporcionada de esos beneficios.

Nos quedaríamos, en consecuencia, forzosa é inevitablemente, sin papel y sin moneda.

¿No temen nuestros gobernantes que una situación de esta naturaleza pueda producirse?

¿No la estiman siquiera como posible ó verosímil?

Y si tal fuese ¿cómo no sienten las enormes responsabilidades que les afectarían en una eventualidad de esta naturaleza?

Se ha menester, en realidad, de una beatitud, de una placidez de espíritu encantadoras ó bien de un fanatismo musulman, para afrontar con el corazón ligero, estas contingencias gravísimas.

Señores, se grita de todos lados á nuestros gobernantes, el día en que el país se convenza de que decididamente realizaréis el magno jubileo de los canjes del 96, no quedará un solo billete fiscal sirviendo de circulante, porque todos, absolutamente todos, se guardarán con triple llave para presentarse á la feria.

Lo cual nos llevaría derechamente, no ya sólo á la crisis monetaria sino á la suspensión de la vida misma, económica y comercial de este país, que se hallaría, en un instante dado, sin ningún instrumento de cambio, sin ninguna común medida de valores.

Contestar á esta objeción, como se lo ha hecho hasta hoy, afirmando que el papel no se ocultaría porque nadie se priva anticipadamente de sus intereses y beneficios,

es desconocer en absoluto los recelos y finísimas suspicacias del capital.

¿Quién podría mirar con calma sus reservas de billetes entregadas á manos ajenas ó depositadas en un banco, en momentos más ó menos próximos al gran jubileo?

Sería reducidísimo el número de los inocentes que, á ciencia cierta de que nadie les devolvería sus capitales, á mutuo ó en depósito, en vísperas del canje, prefiriesen un interés de siete, ocho ó diez por ciento, si se quiere, corriendo el inminente riesgo de que fueran otras manos las que llevasen á la feria sus propios capitales y las que obtuviesen en cambio del papel de 12 peniques, la moneda de oro de 24.

Lo repetimos: el día en que el país se penetrara de la practicabilidad ó siquiera de la posibilidad de que se efectuaran los canjes prometidos, la ocultación semi-total del circulante sería un hecho fatalmente inevitable.

Pero, ni es esto todo.

La crisis que los artificios de estas leyes tienen tan previsoramente decretada, no sólo traería la desaparición del circulante, sino que causaría la falencia necesaria de los bancos.

¿Con qué valores responderían esos establecimientos al retiro forzoso, inevitable, de los *ciento once millones de pesos* que suman los depósitos hoy vigentes?

Porque es evidente que los dueños de esos capitales en depósito, anhelarian, como todo hijo de vecino, concurrir al magno jubileo.

Cobrarían, exigirían, por lo tanto, la devolución de sus depósitos, que dicho sea de paso, representan una cifra superior *en más de sesenta millones,* al máximum del circulante, fiscal y particular, de que dispone el mercado.

Sábese, de otro lado, que las sumas á que ascienden los depósitos, están representadas por las obligaciones del público en cartera de los bancos, obligaciones impo-

sibles de exigir, ni aún en circunstancias normales, en un momento dado.

Por manera que cabría á los bancos la necesidad impostergable, inmediata, ineludible, de devolver los depósitos, so pena de falencia, al propio tiempo que se les colocaría en la imposibilidad moral y hasta material, de recaudar el monto de sus créditos activos.

Lo cual importa, breve y redondamente, declarar *por ley* la falencia general de todos los establecimientos de crédito del país.

Es curiosísimo de observar que después de haberse resuelto, venciendo resistencias y vacilaciones, convertir toda la emisión bancaria en fiscal, sólo por prevenir el peligro de que los establecimientos nacionales de crédito no puedan reunir el oro necesario para el canje de sus billetes, se mire como cosa baladí y de poco momento, la expectativa de que esas mismas instituciones se encuentren, en día no lejano, en la necesidad de devolver al público, violenta y totalmente, la masa general de sus depósitos.

De suerte que se prevee el peligro de que los bancos no puedan devolver al público *los dieziseis millones de pesos* de sus emisiones totales y no se da importancia, ni se atiende en manera alguna á la verdadera imposibilidad en que se les coloca para pagar *los ciento once millones de los depósitos*.

La lógica de estos diversos procedimientos es admirable.

Quienes continúen sosteniendo, contra las evidencias del acontecimiento, que el cambio tiene que subir, antes del canje de 1896, á los mismos 24 de la moneda, no se preocuparán, por cierto, de la condición que crean á los bancos.

Pero, los que contemplamos la marcha de nuestro movimiento económico, tal como nos la presentan los hechos,

no podemos siquiera explicarnos la pasividad de los poderes públicos, la displicencia misma de la opinión, ante la perspectiva pavorosa que bosquejamos.

Cuando el Secretario Sherman afrontó la ejecución de la ley americana, titulada «Resumption act,» no teniendo en arcas públicas sino 135 millones de pesos en oro ó pastas metálicas para canjear cerca de setecientos millones de greenbacks y de notas del tesoro; se le increpó duramente su temeridad.

El hábil Ministro americano no se inquietaba, sin embargo, ante los vaticinios de fracasos que oía de todas partes, porque teniendo el cambio *á la par* como le tuvieron los Estados Unidos desde seis meses antes de ejecutarse la ley de conversión, ó sea, desde seis meses antes del 1.° de enero de 1879, serían escasísimos los tenedores de billetes que deseáran convertir *valor por valor*, siendo que la moneda fiduciaria era más portátil y más cómoda para las transacciones comerciales.

Fué así como aconteció, en realidad, que durante todo el curso del año 1879 no se llevaron al canje sino *once de los setecientos millones de pesos* que sumaban los títulos fiduciarios convertibles.

Decía, por lo tanto, con profunda exactitud, el ilustre Presidente de la Comisión parlamentaria de «Monedas y Bancos,» Mr. Buckner, que el éxito de una operación de esta naturaleza dependía exclusivamente de la balanza del comercio y que «el estado de los cambios *era la clave de la situación.*»

Pasa, en este momento, entre nosotros, algo diametralmente contrario.

Es manifiesto y claro, como la luz del medio día, que con cambios á 12d no quedaría un billete que no se canjease por la moneda de oro de 24.

Y entonces acontecería, á diferencia de lo que pasó en 1879 en los Estados Unidos, que si bien el Gobierno

pudiera hallarse en aptitud de obsequiar magnánimamente á los tenedores de billetes, doce peniques esterlinos por cada peso de papel, porque para eso se había provisto de antemano, sacrificando al país, de todo el oro necesario; los bancos se hallarían absolutamente inhabilitados para devolver los depósitos y, en consecuencia, fallidos.

Espíritus recelosos y en extremo suspicaces, piensan que éste es precisamente el resultado que se persigue.

No compartimos de aquellos conceptos que juzgamos temerarios, pero la impasibilidad y la tenacidad que se manifiesta ante las consecuencias desastrosas que llevan producidas las leyes que nos ocupan, no tiene, es cierto, una explicación bastante satisfactoria.

Hay quienes afirman que se dejará caminar el sistema de artificios perturbadores que combatimos, hasta tanto que sus efectos demuestren más palmariamente todavía su absoluta impracticabilidad.

Lo cual significa, en resumen, que mientras no se produzca la ocultación en masa de los billetes fiscales, mientras el interés no suba á 25%, mientras no acabe de deshacerse, como un panal en el agua, la fortuna mobiliaria nacional, mientras no caigan en falencia nuestros industriales, y nuestros bancos; no hay esperanza alguna de reacción.

¿Será esto cuerdo, discreto ó siquiera posible?

Si gobernar es prever, semejante resolución aparecería, realmente, como algo de inverosímil.

Precisamente son los intereses económicos de un país los que no admiten este sistema de experimentación empírica, porque es ocasionado á transtornos de consecuencias irreparables. No se ensaya *in anima vili*, sino en las cuerdas más sensibles del organismo nacional.

Habría sido de creer que los males ya consumados, bastaran y sobrasen como prueba y como condenación del arbitrismo.

Habría sido de creer, sobre todo, que hubieran sentido debilitada su fe, quebrantada su conciencia doctrinal, los que han presenciado el fracaso estrepitoso de una parte tan considerable de sus elucubraciones.

Los desastres del empréstito externo del 92, la enormidad aquella de los bonos internacionales, el fracaso de las reservas metálicas de los bancos y, por fin, la derogación anunciada del pago en oro de los derechos de aduana; eran ya suficientes lecciones para quebrantar al más taimado doctrinarismo.

Un día tras otro día nos acercan el plazo de la conversión, en la propia medida que nos alejan de su practicabilidad.

Cuando en noviembre de 1892 se decretó que el papel fiscal fuera equivalente á 24 peniques esterlinos para el 1.° de julio del 96, escusaba siquiera la temeridad del mandato, el propio desconocimiento de su ineficacia.

Pero, hoy que los hechos han burlado tan cruelmente á los que pretendieron dominar con un poco de tinta el curso natural de los fenómenos económicos, se hace ya inexplicable la persistencia en tamaños errores.

Once ó doce peniques que vale nuestro papel, no pueden equivaler á 24 y quien persista en cambiar á fecha fija un valor por otro, persiste en que el erario público obsequie á los acaparadores del papel fiscal, doce peniques esterlinos por peso.

III

Comprenderá Ud., señor Gundián, que estos resultados son tan radicalmente inaceptables, que no es posible temer que lleguen á producirse, porque no se les toleraría. Si así como nos hallamos á dos años de distancia de los canjes ordenados por la ley del 92, nos encontráramos en vísperas de su realización, el país se levantaría para imponer la postergación indefinida de operación tan ruinosa.

Por desgracia, no corre impunemente el tiempo que tarde en llegar esta necesaria é ineludible reacción.

La amenaza de los canjes *á día fijo* y cualquiera que sea el tipo de los cambios, es la causa más fundamental de las perturbaciones económicas del momento, del alza de los intereses, de las restricciones forzadas del crédito y de la anemia comercial que nos invade más alarmantemente cada día.

Porque es evidente que la liquidación ruinosa que se nos tiene preparada, paraliza desde luego todo el movimiento normal de las transacciones, hace ocultarse al capital, destruye la base de todo cálculo mercantil y nos muestra el caos como única perspectiva.

Se impone al patriotismo de nuestros gobernantes la impostergable necesidad de remover, sin más pérdida de tiempo, esta causa generadora de transtornos y perturbaciones gravísimas.

Diga, en buena hora, una ley inmediata, lo que forzosamente habrá de decirse más adelante, esto es, que la titulada conversión no se llevará á efecto sino cuando el estado de los cambios lo permita, cuando nuestros mercados puedan retener la moneda que se destine á servir de circulante y cuando, en resumen, podamos utilizar los sacrificios del país *en obsequio exclusivo del país.*

Una declaración legislativa de esta naturaleza, unida á la derogación, oficialmente anunciada ya, del pago en oro de los derechos de aduana y á la unificación del circulante fiduciario que debería quedar á cargo del Estado mientras dure la inconvertibilidad; suavizaría en el acto todas las tiranteces de la situación, levantaría, sin la menor tardanza, el tipo de los cambios, bajaría el de alquiler de los capitales, consolidaría y entonaría los valores mobiliarios y marcaría el término de las restricciones del crédito.

No necesitaremos añadir que todo ello no será suficiente para enriquecer al país ni para concluir con los desequilibrios económicos que nos han traído á la situación que atravesamos.

Para males de este carácter y de esta transcendencia, no hay otro remedio discreto y racional que el trabajo, en su doble acepción técnica, es decir, de ahorro y producción. Ya vendrá el instante oportuno de señalar los horizontes que en este sentido se ofrecen á la actividad nacional y á la previsión de nuestra política económica.

Por el momento sólo se trata de remover los obstáculos artificiales que reagravan nuestra perturbada condición económica general. Y es tan sólo en este sentido y con este alcance limitado, como señalamos á nuestros legisladores los puntos más culminantes de la tarea inmediata y eficacísima que, á nuestro humilde juicio, deberían acometer sin tandanza.

Se ha sostenido que la obligación del Estado de pa-

gar 24 peniques de oro á los que le presentasen el 1.° de julio de 1896 los billetes de su emisión, es ya legalmente *irrevocable* y que, por lo tanto, postergada definida ó indefinidamente la fecha inicial de la conversión ó derogada en absoluto la ley que la establece, subsistiría aquel deber en toda su integridad.

Respetamos muy sinceramente la autoridad personal de quienes han emitido recientemente estos conceptos en la prensa, pero disentimos en absoluto de su fundamento jurídico.

Por fortuna, no es tan apretada ni tan sin salida nuestra situación.

No es constitucional la ley de 1892 y puede, en consecuencia, ser modificada ó lisa y llanamente derogada, por otra posterior.

Ni se han creado tampoco á la sombra de aquella ley, derechos adquiridos que el propio legislador fuera inhábil para burlar ó arrebatar.

A nuestro juicio, no existe ni remotamente en este caso, un conflicto que afecte al principio de la retroactividad de las leyes.

La promesa contenida, libre y espontáneamente aceptada en la ley del 92, de pagar el billete fiscal á 24 peniques el 1.° de julio del 96, no da á nadie la facultad de reclamar su cumplimiento.

Aquella declaración constituye una mera expectativa en favor de los que fueren tenedores del papel fiscal, á la época señalada para su canje, por moneda metálica.

Pero tal expectativa se halla subordinada, como todas las de su clase, á las disposiciones de una ley posterior que libre y desembarazadamente puede prolongar el plazo de su cumplimiento ó someterle á una condición ó evento determinado.

No parece que fuera necesario detenerse más latamente en consideraciones que son elementales.

Si la extraña tesis que impugnamos tuviera algún fundamento serio, la Rusia habría sido compelida en seis ocasiones, durante el curso del siglo, á ejecutar sus reiteradas promesas, deferidas hasta este momento, de realizar la conversión de su circulante fiduciario y otro tanto habría pasado á la Inglaterra antes de 1821 y estaría pasando, ahora mismo, al imperio Austro-Húngaro.

Hemos juzgado necesario tocar, aún cuando sea muy somera é incidentalmente, este punto, porque á causa de la autoridad misma de quienes sostienen estos conceptos, á nuestro juicio, equívocos, se acentuaba su gravedad.

Fuera inútil, como se comprenderá, concluir con la fecha fija de la conversión, modificar ó hacer condicional este precepto de la ley del 92, si, como se pretende, el deber del Estado de pagar 24d por sus billetes el día 1.° de julio del 96, no admitiese modificaciones o atenuaciones.

Y así eliminado este pretendido obstáculo para concluir con la conversión á día fijo, reanudamos el hilo de nuestras observaciones.

No es dable pretender ó sostener con tranquilidad y libertad de criterio, que pudiéramos radicar en los mercados nacionales una moneda de oro de 24d, con cambios que apenas representan la mitad de ese valor.

Es, enseguida, una quimera, cifrar exclusivamente el bienestar económico de los pueblos en la existencia del circulante metálico.

Los pueblos no son ricos ni son pobres porque tengan ó porque carezcan de moneda metálica.

Son ricos cuando producen más de lo que consumen.

Son pobres, por la propia causa, cuando viven á merced de la industria extraña y con producciones naturales deficientes para saldar sus consumos.

La moneda metálica, que es una mercadería como cual-

quiera otra, un ítem de la fortuna pública nacional, acude siempre á los mercados que pueden retenerla y huye de las plazas deudoras, precisamente porque siendo un artículo de uso y empleo universal, es el primero de que se echa mano para el pago de los saldos del intercambio.

De suerte que la existencia de especies metálicas con oficio de circulante, es un síntoma que acusa la prosperidad de los pueblos, pero que no la constituye por sí misma.

La Francia de 1870 á 1877 no tuvo circulante monetario y tuvo, en cambio, más de dos mil millones de francos de papel bancario de curso forzoso.

Pero, ese gran país que no tenía especies metálicas como circulante, tenía riquezas debidas al empuje de su producción, tenía un comercio exterior floreciente, tenía rentas de capitales, valores mobiliarios ó efectos públicos colocados fuera de sus linderos y recibía, en fin, el sempiterno tributo que han pagado á sus poblaciones los viajeros y turistas de todos los puntos del globo.

La balanza del comercio de intercambios se mantuvo favorable al país aún en medio de las calamidades de una guerra tan infortunada como dispendiosa. En estas condiciones no fué, por cierto, una dificultad el restablecimiento de la circulación monetaria. El curso forzoso cesó de hecho desde el momento mismo en que el oro no tuvo premio sobre el papel. Fué así como, á pesar de no haberse restablecido legalmente la circulación de especies sino en 1877, imperaba de hecho en las transacciones comerciales desde 1875, el empleo de uno y otro circulante, indistinta é indiferentemente.

Lo cual prueba que un pueblo puede ser rico sin tener circulante metálico, siempre que posea los verdaderos elementos constitutivos de la riqueza, ó sea, la abundancia de producciones, un arte industrial avanzado, el es-

píritu de trabajo y de ahorro, la sobriedad, en fin, de sus consumos.

Hemos comprobado todavía, en alguna ocasión anterior, estas verdades irredargüibles, presentando el mismo fenómeno desde un opuesto punto de mira.

Con ejemplos prácticos contemporáneos, nos ha sido sencillísimo demostrar que la circulación de especies metálicas en un mercado, no es un talismán que les ponga á cubierto de desventuras económicas.

Puede un mercado hallarse en plena circulación monetaria, transitoriamente se entiende, y en una deplorable condición económica.

Tal es, por ejemplo, en los momentos actuales, la situación de la Italia y de la España. Es notoriamente sabido que esos países, adherentes á la liga de la Unión Latina, tienen en calidad de circulante, especies metálicas de la misma clase, peso y ley que las de Francia. Entretanto el cambio entre París y Génova fluctúa entre 12 y 15 por ciento de pérdida para esta última plaza y entre París y Madrid, la diferencia monta hasta 23 por ciento. Todo lo cual depende sencillamente de que faltan productos italianos ó españoles para pagar las importaciones francesas y que si esta situación se prolongara por algún tiempo, vendría la exportación de la moneda de las plazas deudoras hacia el mercado acreedor, dejando á las primeras en completo curso forzoso.

No hay medio de escapar á estos resultados que son ineludibles en el juego normal del movimiento económico.

Y cuando los mercados deudores luchan por retener su moneda metálica ó por recuperarla prematuramente, reagravan á pura pérdida su situación, comprometen su porvenir porque ahondan los desequilibrios de su intercambio y aumentan sus deudas en tanto cuanto suma el valor comercial de las especies metálicas que destinan á servir de circulante.

Se cumple, en la materia, al pie de la letra, la moraleja del fabulista:

Que aunque la mona se vista de seda,
mona y muy mona siempre se queda.

Este país ha sido valiente, sin disputa, para ensayar reformas en sus instituciones. Recientemente hemos implantado algunas que impondrían temor á pueblos de mucha más avanzada civilización y cultura.

Pero, lo que es este ensayo *sui generis*, *especialísimo*, *único en la historia del mundo*, de convertir papel de 12 peniques á moneda de 24, no sólo requiere sin igual coraje sino una temeridad inconcebible.

Y decimos que la tentativa es singularísima y única, porque, como lo hemos probado en ocasión anterior hasta la redundancia, ningún país de la tierra ha pasado de la circulación fiduciaria á la de especies sino cuando el cambio lo ha permitido por hallarse á la par ó á los alrededores de la par.

Así se operó la conversión inglesa de 1821, la francesa de 1877, la americana del 79 y hasta la misma que verificara la Italia en 1882.

En materia de ejemplos prácticos de la historia contemporánea, los autores ó inspiradores de las leyes del 92 y sus abogados en la prensa, no han podido invocar otros precedentes en su apoyo que los de la titulada conversión peruana de 1887.

Y, á la verdad, que no faltan las analogías entre aquel hecho y este proyecto. Porque si la conversión del Perú no fué, en resumen, sino un pago por cesión de bienes, que ha dejado al fallido perdurablemente insolvente, á nosotros se nos quiere arrastrar á esa misma tristísima situación, no ya porque nos hubiéramos alzado contra la deuda del papel fiscal, sino, á la inversa, porque se nos

quiere obligar á pagarla con un recargo de doscientos por ciento.

Es sabido que el cambio en la República Argentina se encuentra en condiciones mucho menos desventajosas que las nuestras, no obstante que la deuda de ese país es *cuatro veces* mayor que la de Chile y, apesar todavía de que los saldos pasivos de su balanza de intercambios, han sido estimados en la enorme cifra de £ 12.000,000.

Pues bien, si algún hombre público ó algún Congreso argentino hubiera tenido la peregrina idea de convertir *sus 300 millones de papel de curso forzoso* en moneda de 24 ó de 20 peniques, habrían producido la catástrofe más descomunal y, arruinado el poder productivo de esa nación, que sostiene el vigor relativo de su papel-moneda, la habrían llevado al desconcierto y al caos.

Por fortuna para aquel país, el rumbo de su política económica ha sido esencialmente distinto.

Reconociendo los errores, las dilapidaciones y las locuras pasadas, hijas de un fiebroso espíritu de progreso desequilibrado, dedícanse los esfuerzos del momento á aumentar, por todos los caminos posibles, la fuerza productiva del país, estimulada de antemano por una legislación aduanera previsora y discreta, y á realizar, de otro lado, las economías compatibles con las exigencias de la administración y las necesides sociales.

IV

Habrá Ud. visto que se insiste en llamarnos *enemigos* de la circulación metálica, patrocinantes de los dañinos *intereses* que nacen y se arraigan á la sombra del papel, especuladores, etc., etc.

En estas acusaciones huecas, se nos envuelve, señor Gundián, en muy buena y numerosa compañía, porque habrán también de ser papeleros, especuladores, etc., etc., todos los publicistas, estadistas y gobernantes de los distintos y cultísimos países que, así en América como en Europa, mantienen por nececidad y por cordura la moneda fiduciaria.

Tenemos para tranquilizarnos con la calidad y el número de nuestros cómplices.

Ni acertamos á comprender tampoco por qué nuestro pensamiento ha de ser tan infelizmente traducido.

No combatimos hoy ni hemos combatido jamás el *régimen* de circulación monetaria, porque eso sería sencillamente absurdo. Como lo hemos escrito diez veces, ese sistema es al organismo económico de las sociedades, lo que la salud es al organismo humano.

Lo que venimos *únicamente* discutiendo desde mucho tiempo atrás, desde antes de dictarse las leyes tituladas de conversión, es, en primer término, la *oportunidad* y después el *procedimiento*, el modus operandi, ideado para realizarla.

Y lo que sostenemos, lo que creemos haber probado hasta la saciedad, es que la *oportunidad* y *el procedimiento* han sido detestablemente elegidos.

Ahora, aquello de que existan en esta sociedad, intereses vinculados á la permanencia *indefinida* del papel-moneda, nos parece una fábula y un recurso de mala dialéctica.

Serían únicamente nuestros industriales, agricultores ó mineros, quienes pudieran cargar con el supuesto pecado.

Nosotros comprendemos que, en realidad, se sentirían muy desfavorablemente afectados los intereses de esos industriales, si por medio del artificio y de la alquimia económica, se hiciera subir violenta y transitoriamente, el tipo de los cambios, desde los 12 peniques del día, á los 24 de la moneda proyectada.

Dados los precios que nuestros productos agrícolas y mineros tienen hoy en los centros de consumo, una alza artificial de esta naturaleza, concluiría con esas industrias ó, por lo menos, las limitaría á satisfacer las necesidades internas de nuestros mercados, que son relativamente pequeñas.

Pero, si el alza del cambio fuera la obra de un movimiento ascendente general de la fortuna pública, no traería semejantes desastres y lo que nuestros industriales perdieran en el precio nominal de sus producciones, lo ganarían en su calidad de consumidores, en las facilidades del crédito, en la reducción del tipo corriente de intereses y, sobre todo, en el aumento progresivo de los consumos que es signo infalible, resultado inmediato del bienestar económico de los pueblos.

Y si tal sería la situación de los mismos productores de artículos exportables, es manifiesto que para los que viven de rentas de valores mobiliarios, de utilidades de comercio, de sueldos o de jornales; la circulación metá-

lica significa una duplicación muy efectiva de sus haberes.

¿Sería entonces posible que se hallasen en estas últimas numerosas categorías, los que cargamos con el estigma de *enemigos* de la circulación metálica, papeleros y especuladores?

Inverosímil parecería la suposición ya que son poquísimos los espíritus privilegiados que, por ascetismo, pudieran resistir al deseo de aumentar en un ciento por ciento sus capitales, sueldos, rentas ó beneficios.

Los deudores mismos, tan sospechados por la dialéctica conversionista, no tendrían interés alguno positivo y cierto para resistir á la conversión, porque es evidente que si sus obligaciones sumarían un número más alto de peniques esterlinos, se les daba, en cambio, una moneda de igual poder para extinguirlas. No les importa, por lo tanto, á los calumniados deudores, que sus compromisos adquieran una mayor densidad efectiva, si es igualmente densa la moneda que se les hace llegar á sus manos para solucionarles.

Lo que sí les importa inmensamente á los deudores, como á todo el país en general, es que se intente llegar á una conversión imposible, que tenga por fuerza que traer el encarecimiento y la desaparición del circulante, la extinción del crédito, la mutilación de la industria y el agotamiento del poder productivo del país.

Es obvio que los deudores, como los miembros más débiles de la sociedad económica, serán los primeros en sucumbir al peso de tamaños yerros.

Y precisamente por esto reviste caracteres más odiosos la calaverada en la cual nos hallamos empeñados. Porque si es evidente que la empresa ha de fracasar antes de consumarse, libertando, más ó menos, de sus estragos á los que tengan fuerzas para aguardar el derrumbamiento; es también incuestionable que en el ca-

mino de esta malhadada tentativa, caerán lastimosamente, para no volver á levantarse, los más flacos y, por esto mismo, los más dignos de auxilio y de conmiseración.

Hé aquí cómo, en el fondo de este problema, todos los intereses son armónicos y todos ellos tienden hacia el circulante monetario *como un desideratum, como una aspiración.*

Pero, á causa precisamente de que reconocemos y abarcamos en toda su amplitud la profundidad de los transtornos que ocasionan los desequilibrios económicos, de los cuales el papel moneda no es sino el reflejo, el signo material; redoblamos nuestros esfuerzos para que no se perpetúen y se arraiguen estos males con los falsísimos mirajes del empirismo dominante.

No queremos, en suma, venenos que agoten las escasas fuerzas del enfermo, aplicados como remedios por manos inexpertas y por espíritus preocupados ó alucinados.

Los que convierten la serena dilucidación de estos problemas, en estériles polémicas de amor propio, han tenido tiempo y paciencia bastante, para rebuscar los boletines oficiales de sesiones legislativas en demanda de contradiciones con las cuales sorprender á sus adversarios de ideas.

Hemos caído en el número de los sorprendidos, ¿sabe Ud. por qué? Porque *en 1880* combatimos en el Senado *un proyecto político*, por el cual se trataba de obligar al Gobierno *á emitir seis millones* de papel moneda á fin de impedirle que tomara una parte de esos fondos de un empréstito interno, como lo proponía y lo consideraba preferible el Ministro de Hacienda de aquella época.

A quienes han recordado, no sin cierta complacencia un tanto pueril, aquel incidente parlamentario de todo punto extraño á las materias que ahora se discuten; nos

limitaremos á contestarles que si hoy hubiera de renovarse el debate de 1880, nos hallaría en las mismas filas y sosteniendo la misma tesis que, por aquella reculada época, nos cupo sustentar. Y, á la verdad, que con el mismísimo criterio con el cual combatíamos en 1880 la extensión innecesaria de las emisiones, impugnamos y combatimos los canjes importunos y desastrosos decretados para 1896, porque ellos habrían fatalmente de conducirnos á renovar y arraigar el régimen del papel moneda por medio siglo más, dejándonos por epílogo de la calamitosa historia, una crisis intensa y dolorosísima.

Y son estos mismos rebuscadores de papeles viejos, los que han invocado también, en la última hora de este debate, con idéntico discernimiento, los resultados que arroja la estadística de 1893 para desautorizar la teoría de la balanza comercial.

Se ha repetido hasta la saciedad que, según las cifras de la estadística citada, la exportación superó en más de cuatro millones de pesos á la masa de internaciones y que, por lo tanto, si la tesis de la balanza comercial fuera exacta, deberíamos tener en estos momentos cambios á la par y hasta con premio.

Esos señores prescinden, en lo absoluto, al formular su triunfante argumento, de todo el movimiento de las exportaciones invisibles y de todo el monto de los capitales extranjeros que salen del país.

Pero, no son estos factores, desconocidos ú olvidados, los que desnudan más capitalmente de toda importancia el argumento *irresistible*.

Ignoran todavía ó fingen ignorar los que invocan revesadamente los resultados ostensibles de la estadística del 93, que para formar los $ 72.245,116, monto atribuído á las exportaciones, se ha tomado en cuenta el valor de los 21 millones de quintales de salitre, producidos y

exportados en ese mismo año, que importan algo como £ 6.000,000 y de los cuales apenas si pudiera estimarse como chilena, una cuota máxima de 20%. De lo cual resulta que lejos de ser remotamente cierto que las exportaciones *de valores ó productos nacionales*, hayan excedido en 1893 en más de 4.000,000 á los consumos del país, tenemos un saldo adverso cuantiosísimo, porque á los 72 millones de la exportación hay que deducirles una cuota aproximada al 60% correspondiente al valor del salitre, que es extranjero, á lo menos, en sus cuatro quintas partes.

V

Y puesto que el problema salitrero, al cual acabamos de aludir incidentalmente, domina en lo absoluto nuestra actualidad económica, fuerza será volver á considerarle en relación con sucesos de reciente fecha.

Ayer tan sólo ha visto Ud. llevadas al martillo, una serie de valiosas propiedades salitrales, en condiciones que hacen precaria la suerte de los capitales chilenos que se han lanzado valientemente á esta industria.

Aplaudimos la energía de esos industriales, que rompiendo una inercia de quince años, han resuelto explotar la más rica y la más próspera de las fuentes de nuestra riqueza nacional.

Pero lamentamos, al propio tiempo, que la incurable avidez fiscalista, coloque á esos industriales en condiciones duras y en la necesidad de competir con el capital extranjero, aclimatado muy de antemano en estas empresas, más barato, más abundante y más poderoso que el nuestro.

Las angustiosas dificultades de la condición económica del país se disiparían ó se atenuarían muy considerablemente, el día en que los poderes públicos llegaran á penetrarse de la indispensable necesidad de entregar á nuestros connacionales, en condiciones de favor y de ventaja, esas mismas propiedades que hoy se enajenan en beneficio exclusivo del tesoro fiscal.

No quieren creer nuestros coloniales financistas, que al pais no le interesa ni le aprovecha en manera alguna, que el Fisco siga empozando montañas de libras esterlinas porque ellas habrán de consumirse semi-estérilmente para la fortuna pública, en forma de indefinidos aumentos de sueldos, creaciones de nuevas oficinas de administración ó en lujosos armamentos navales y terrestres.

En cambio, lo que debiera interesar, viva y profundamente al país, es que la industria y el trabajo nacional se asimilen las riquezas naturales de su propio suelo para que pueda acercarse la hora de iniciarnos en las industrias fabriles que son las únicas que pueden darnos las bases sólidas y permanentes del progreso económico.

Y éste que es el verdadero y único interés *nacional*, es armónico con el mismo interés *fiscal*, porque está cien veces comprobado que la riqueza pública es la más positiva, la más sólida y la más segura reserva de los gobiernos.

Pensamos y hemos venido sosteniendo desde mucho tiempo atrás, que las propiedades salitrales que son del país y no del fisco, han debido entregarse en forma de contratos de arrendamiento, ó como se les denominaba en el Perú, de contratos «de elaboración,» á los capitalistas ó sociedades *exclusivamente nacionales* que las solicitaren y sin más gravámenes que el pago del impuesto común de exportación y el de una módica suma por cada quintal de salitre que produjeren los elaboradores.

En los casos de competencia entre nuestros mismos connacionales para adquirir estas propiedades, se las acordaría á quienes ofreciesen una mayor cuota de arrendamiento por quintal elaborado, á quienes dieren mejores garatías ó, por fin, á quienes justificasen la existencia de una mayor suma de capitales efectivos destinados á estas

explotaciones. Nada sería más fácil que establecer en una ley las condiciones de preferencia.

Estamos completamente ciertos de que á estos ó análogos procedimientos habrá de llegarse en un porvenir próximo, lo que traería, en definiva, la nacionalización de la industria.

El espíritu de fiscalismo que hoy nos extrangula, no habrá de seguir por mucho tiempo su obra de enervamiento de las fuerzas vitales del país, porque la opinión se despierta muy de prisa é impondrá en breve rumbo más discreto á la política económica sin horizontes que nos estrecha y nos ahoga.

Aún la vieja legislación española, obedecía á miras más amplias acordando á la industria privada la explotación y utilización de las substancias fósiles en condiciones determinadas de antemano por la misma ley.

Y aparte de la manera de descubrirlas y ubicarlas, ¿qué diferencias pudieran razonablemente establecerse entre la propiedad minera, peculiarmente así llamada, y los depósitos de caliche?

¿Cuáles son, en otros términos, los distintos caracteres que una y otra riqueza representan en orden á sus condiciones de apropiación?

Nosotros no las descubrimos.

Ni las divisó tampoco la legislación peruana que dominó en estas materias á contar desde el descubrimiento de las calidades fertilizantes del salitre, hasta que llegara el monopolio ideado por el Presidente Pardo y sancionado por la ley de 1875.

Antes de esa fracasada combinación, los terrenos salitrales se denunciaban y se concedían en el Perú, como se denuncian y se otorgan las minas metalíferas y se hallaban sometidos á la misma legislación.

Si nosotros no encontramos, al tiempo de ocupar á Tarapacá, constituída en estas condiciones la propiedad

salitrera, fué, lo repetimos, porque un ilustre gobernante peruano, seducido con la idea de reconstituir la riqueza fiscal de su patria, pretendió radicar en manos del gobierno, el monopolio de la producción y de la explotación de estas sustancias.

Dictóse, con este fin, la ley general de expropiación de 1875 y el país tuvo que adquirir, por esa compra forzada, á título oneroso, las mismas propiedades que había entregado gratuítamente á la industria.

Entre tanto, el Gobierno que había hecho el monopolio persiguiendo una quimera irrealizable, se encontró dueño absoluto de toda la propiedad salitral y en la imposibilidad, también absoluta, de explotarla *administrativamente*. Vióse por esto obligada la administración peruana á llamar en su auxilio á los mismos industriales á quienes acababa de desposeer, para devolverles sus propias oficinas á fin de que continuasen explotándolas en arrendamiento. Tal fué el origen de los contratos denominados «de elaboración,» merced á los cuales el gobierno concedía el uso y goce de las oficinas, á quienes le pagaran una cuota de arrendamiento por quintal de salitre extraído, sin perjuicio del derecho común de exportación que pesaba sobre todos los elaboradores.

En esta condición se hallaba la propiedad salitrera al tiempo de la ocupación de Tarapacá por los ejércitos de la república.

El gobierno de Chile juzgó, desde el primer momento, irrealizable, la idea de constituirse en industrial y elaborador de salitres, idea que entrañaba ademas peligros sobradamente notorios de desnaturalizar las funciones de la administración pública.

La plasticidad del Estado no podía someterse á una prueba de esta naturaleza.

Dominó, en consecuencia, la resolución de devolver á

la industria privada el campo invadido de su acción exclusiva.

Pero, para devolver las oficinas expropiadas á sus antiguos dueños, era fuerza exijirles que, á su turno, devolviesen ellos tambien el precio que recibieron por esas propiedades.

Así, y sólo así, se retrotraerían las cosas á la situación que tuvieran antes de la ley de 1875.

Ahora bien, como el gobierno peruano había pagado las oficinas expropiadas con «certificados salitreros» contra el tesoro nacional, pagaderos en letras sobre Londres al cambio fijo de 44 peniques, con seis por ciento de interés y dos de amortización; se hizo indispensable estatuir, como en efecto lo hizo el decreto supremo de 9 de febrero de 1882, que las expresadas oficinas se devolviesen á quienes entregaran los certificados representativos de su valor.

El Estado renunciaba al papel de industrial y monopolista, devolvía la propiedad al dominio privado del cual la arrancara la expropiación de 1875 y exijía en cambio, como era indispensable, que se le reintegrase del valor pagado por esos establecimientos.

La ley de 1880 tenía establecido de antemano, un derecho uniforme de exportación, que gravaría á los salitres que salieren de cualquiera zona del país.

Quedaba así completamente restablecido el campo de acción de la industria privada; volvíamos á la condición que tuviera la industria antes de la expropiación de 1875.

Así despejado el terreno, ha debido dictarse una ley que definiese el carácter y la condición legal de la propiedad salitrera, sus calidades de apropiación y la suerte que debían correr los títulos de dominio privado constituidos bajo el imperio de la legislación peruana.

Esa ley no se ha dictado hasta hoy y llevamos quince años de esta situación anormal y anti-económica.

Administrativamente y de hecho se ha mantenido clausurada la industria, fortaleciendo el monopolio de los poquísimos propietarios que en 1883 recuperaron sus oficinas mediante á la devolución de los certificados salitreros expedidos por el gobierno peruano como precio de la expropiación. Esos propietarios son casi en su totalidad extranjeros, de suerte que durante estos quince años de verdadero interregno legal para la propiedad salitrera, se han exportado del país más de 200 millones de quintales de salitre, que han pagado derechos al fisco por la suma casi fantástica de 24 millones de libras esterlinas, ó sea, algo como 480 millones de pesos de nuestro papel actual de 12 peniques; sin que de todo ese suculentísimo festín servido á la industria extranjera y al fisco, la riqueza pública nacional haya podido recojer sino unas pobres migajas.

Se hace, pues, indispensable que concluya algún día esta situación anti-económica é irregularísima, y que una ley bien inspirada abra de par en par las puertas de la industria para el trabajo y el capital chileno, sea en la forma de contratos de arrendamiento ó de elaboración que nos ha cabido la honra de proponer, ó en otra cualquiera que se excogitara por el legislador.

De nada ha servido hasta hoy al país esta riqueza que guarda con triple llave la voracidad fiscal y que, representada por centenares de millones, no ha tenido otro destino que el de alimentar las prodigalidades de gobiernos y Congresos.

Necesitamos, en consecuencia, urgente, impostergablemente, que esas riquezas se movilicen y fructifiquen por la acción de la industria privada, para dar vida, para inyectar savia generosa al anémico organismo económico del país.

Hay ciertos bienes nacionales que por su propia naturaleza no son aptos para la utilización de la industria privada.

Tal fué, por ejemplo, para el Perú, su riqueza guanera, que no podía ser otorgada á determinados individuos sin lastimar el derecho de todos los demás, porque para apropiársela no se requería de trabajos ni de sacrificios personales ó de dinero. Se enriquecía con el guano quien fletaba un buque para vaciar á sus bodegas los depósitos de Chincha.

Esta clase de bienes son esencialmente fiscales y deben ser distribuidos, por órgano de la administración pública, si no se quiere caer en el favoritismo ó en el peculado.

Pero la riqueza salitrera, de carácter esencialmente diverso, exije la explotación y utilización de la industria privada. Para hacer salitres se requiere invertir cuantiosos capitales y una suma de esfuerzos, de trabajo y de sacrificios que no son remunerados sino cuando son discretos, perseverantes é inteligentes.

No hay, por lo tanto, más razón para mantener la industria salitrera sometida al dominio exclusivo del Fisco, que la que habría para guardar bajo el mismo estéril monopolio, la propiedad de las minas metalíferas.

Y es un fenómeno digno de atención que un país que ha venido, desde medio siglo atrás, cediendo gratuitamente ó enagenando en condiciones ventajosísimas para los adquirientes, las mismas tierras públicas á fin de entregarlas á la producción nacional, guarde ahora con las más sólidas cerraduras ó se haga pagar precios usurarios por una riqueza minera, absolutamente estéril miéntras permanezca sometida al dominio fiscal é inmensamente fructífera para el mismo tesoro público y, sobre todo, para el país, una vez que fuese declarada de libre utilización.

Frustraríase, no obstante, el fondo mismo del pensamiento que defendemos, si la declaración legal que estableciera la libertad de la industria, no la acordara en exclusivo beneficio del elemento nacional.

De otra suerte, en vez de producirnos bienes, aquella gran medida no haría otra cosa que precipitar ó acelerar la ya muy avanzada colonización industrial de Chile por el capital extranjero.

Nunca hemos podido darnos cuenta de que haya hombres públicos que abriguen escrúpulos ó que se sientan embarazados para amparar con la acción de la ley, el interes exclusivamente nacional-chileno de esta industria.

Como lo hemos expresado en ocaciones anteriores, esos escrúpulos son candorosos y harán sonreir á los mismos extranjeros que les inspiran.

Para no repetirnos, reproduciremos á este propósito, lo que decíamos en octubre de 1893, en las "Indicaciones de la balanza Comercial".

"Absolutamente libre es el país, para trazar los perfiles dominantes de su política y legislación económica.

Todos los pueblos del mundo usan ámplia y egoistamente de este derecho.

Las legislaciones aduaneras, restrictivas y proteccionistas, ¿qué otra cosa son, en el fondo, sino monopolios consagrados en pro de la industria reinícola y en daño de la extranjera?

Y cuando esas legislaciones llegan hasta establecer derechos prohibitivos para la producción similar extranjera, ha podido discutirse la discreción y conveniencia de tales medidas, pero jamás se ha puesto en tela de juicio su licitud y su corrección dentro del derecho de soberanía nacional.

Las prohibiciones de hacer el comercio de cabotaje en las costas de un país determinado por naves extran-

jeras, las de pescar en mares territoriales y tantas otras análogas que son comunes y corrientes en los pueblos de más adelantada cultura, tienen, á todas luces, un carácter mucho más utilitario y restrictivo que la idea lícita y justísima que patrocinamos. Porque no hay ni siquiera pretextos para que se estimase como hostilidad ó aspereza, el que un Estado prefiriese á sus nacionales sobre los extranjeros para arrendarles los bienes de su exclusivo dominio.

Nadie ignora que algunas legislaciones civiles prohiben al extranjero hasta la adquisición de bienes raíces sin permiso del Congreso, como un tributo de respeto, exajerado si se quiere, á la soberanía nacional. Y, es curiosísimo que los estadistas de este país, sientan escrúpulos ó temores, no ya para arrebatar ó perturbar la propiedad extranjera que ampara la ley con la consagración respetuosa del espíritu público, sino única y exclusivamente para conceder á nuestros connacionales el usufructo de los bienes del Estado sujeto á los mismos gravámenes tributarios con los cuales les explotan los extraños.»

Fuerza será reforzar con una sola consideración de esclarecimiento, esta última idea que emitíamos en 1893.

Dueños absolutos quedarán los extranjeros de todas las propiedades salitrales que adquirieron en 1883 y en 1894. Muy respetado debe ser su derecho para explotar esas oficinas, como lo es para saborear y estirar su monopolio ferrocarrilero, sus empresas de gas y agua, sus industrias comerciales de seguros y aprovisionamientos; con las cuales tienen hecha y sólidamente afianzada la conquista industrial de la más rica porción de nuestro territorio.

Pero, que algo quede reservado al elemento exclusivamente nacional y que no se deje agotar la riqueza eventualísima y transitoria que nos diera la guerra del

79, sin que el país se asimile una parte siquiera de sus dones.

No olviden los legisladores nacionales que sobre sus hombros y sobre su conciencia pesa una gravísima responsabilidad, porque son ellos los que han autorizado el indefinido desarrollo de los gastos públicos, hechos con el producido del salitre, hasta pasar de un presupuesto de 17 millones que rigiera en 1878 al de $ 80 y más millones que se propone para 1895, según los últimos proyectos gubernativos.

VI

Había retardado, señor Gundián, intencional y muy deliberadamente, mi contestación á su carta, aguardando que la opinión pública volviera á preocuparse de estas cuestiones económicas, tan desatendidas y tan fuera de boga en esta época de debates político-electorales.

Debido á estas circunstancia, podré añadir á Ud. algunas de las impresiones que me han producido los últimos complejos proyectos ministeriales sobre reformas económicas.

Hay algunos de esos proyectos que deja comentados de antemano el contexto general de mi carta.

Tal sucede, por ejemplo, con la idea de aumentar en un *cincuenta por ciento* el sueldo de los empleados públicos.

Estimo esa idea perturbadora, inequitativa y peligrosa.

En la sobriedad de conceptos que justifiquen las elucubraciones ministeriales, el preámbulo que motiva esos diversos y complicados proyectos, no tiene sino *una palabra* que haga relación con el aumento que se propone en la retribución general de los servicios administrativos.

Se dice allí, en efecto, en una locución incidental, como único fundamento de la idea, que la condición de los empleados públicos "*se hace ya insostenible.*"

Este pensamiento es, cuando menos, incompleto.

Porque lo que es, en realidad, *insostenible*, es la situación de la industria nacional y la condición de la inmensa mayoría de los habitantes del país.

Sería tan insensato y tan desacordado negar las estrecheces que la depreciación de la moneda acarrea á los que viven de *sueldos fiscales*, como desconocer que este linaje de dificultades se aplican, con la misma rigidez, á todos los que viven de retribuciones acordadas por la industria libre, de rentas de capitales á mutuo ó de efectos públicos, de utilidades comerciales, de beneficios de sociedades de crédito ó de simples jornales.

El poder de cambio de la moneda fiduciaria, se encoje para todos en idénticas proporciones y la estrechez se produce al derredor de todos los intereses y condiciones sociales, en la más rigurosa y exacta proporcionalidad.

De esta situación general pudiera decirse ó sostenerse, con mediana exactitud, que escapan los productores de artículos de exportación, porque estiran el valor de sus productos en tanto cuanto se limita el de la moneda con la cual se pagan.

Sólo relativamente es exacta esta excepción, porque el valor de los productos exportables de la industria nacional, hecha prescindencia de los salitres, no está en condiciones de imponerse á los mercados del consumo externo. Precisamente son las producciones agrícolas y mineras del país, las más cruelmente azotadas por la baja de precios en esos mercados. De suerte que si la consideración que nos ocupa pudiera ser aceptable, seríalo única y exclusivamente en cuanto hace relacion con el mayor precio que hayan alcanzado *en los mercados internos*, los artículos alimenticios de la industria agrícola.

Hay todavía otra rama de la actividad comercial, que escapa á las pérdidas que impone la depreciación de la moneda.

Los capitales empleados en el comercio de artículos de

importación, salen relativamente ilesos de estas crisis del circulante porque también hacen refluir sobre el consumidor, todo el importe de la discalificación de la moneda. Por desgracia, el comercio *por mayor* de esta clase de mercaderías, es en lo absoluto un monopolio extranjero, y en cuanto al comercio de reventas en detalle, se halla todavía en un *ochenta por ciento* en manos extrañas.

Sostenemos, en consecuencia, que por lo que atañe á *los intereses propiamente nacionales*, únicos que contemplamos en nuestros estudios, la situación general de todas las clases sociales industriales ó trabajadoras del país; es exactamente la misma y que á todas les afecta, en igual grado, la depreciación de la moneda, con la sola y única excepción de los productores de artículos exportables que pueden encontrar una relativa compensación de esas pérdidas en el mayor precio de sus mercaderías.

Insistimos en estos detalles porque tienen una importancia fundamental en la apreciación del punto concreto que analizamos.

El capitalista que vive de sus rentas, sufre con la depreciación de la moneda, exactamente lo mismo que todo el resto de los habitantes del país.

Si ha logrado, por ejemplo, ese capitalista, formar con las economías de su trabajo una renta de $ 6,000 anuales, se hallará hoy con que los réditos de sus capitales han disminuido su poder en un 75% de lo que valieran cuando teníamos cambios á la par.

No le es dable á ese capitalista, para reparar sus pérdidas, subir á 28% el interés de 7% que han devengado sus dineros ni remontar en la misma proporción los cánones de arrendamiento de sus propiedades, porque precisamente el primero de los efectos que producen estas crisis del circulante es disminuir las facultades del industrial que toma dineros á préstamo, del colono que alquila almacenes ó casas.

Entretanto, los consumos obligados, personales ó de familia, del capitalista que dispone de la renta de $ 6,000, han permanecido, cuando ménos, estacionarios, mientras que se reducía á una cuarta parte, el poder adquisitivo de sus dineros.

El fenómeno se reproduce con sus mismos resultados, cualquiera que sea la destinación á la cual se dediquen los capitales de ahorro.

Si el tenedor de una suma de valores mobiliarios ha querido libertarse de las molestias y azares de la administración de esos fondos, les habrá colocado en acciones de sociedades de crédito ó en efectos públicos y bonos de renta fija.

Pues bien, en el primer caso, la crisis del circulante, junto con colocarle en inminente riesgo de perder parcial ó totalmente sus ahorros, le ha traído una disminución en sus dividendos ó beneficios que llegan á sus manos con la misma debilidad ó disminución de su poder de cambio. No representan ya esos dividendos sino un 25% de lo que valían con cambios á la par.

Ahora, si para evitarse las contingencias de alza y baja en las cotizaciones comerciales de las acciones industriales ó de crédito, se ha buscado la colocación más estable en bonos de renta fija; se hallará hoi el capitalista con una depreciación enorme en el valor de esos bonos y todavía con la misma inevitable disminución en el poder de cambio de sus rentas.

Una tercera ó cuarta categoría de ahorros, habrá buscado más sólidas inversiones en la propiedad raiz.

Si se han destinado esos capitales á construcciones, los edificios han tenido que hacerse con un recargo de costo equivalente á la depreciación de la moneda y, en último término, producirán cánones pagaderos en el mismo circulante depreciado que en vano se trataría de estirar como cuantía lo que pierde como calidad.

Quienes hubiesen preferido la propiedad agrícola como la única apta para colocar reproductivamente sus ahorros, quedándose en situación de producir artículos exportables; habrán tenido que pagar los terrenos en un precio inflado con el importe de la depreciación de la moneda, se habrán encontrado después con jornales subidos por la misma causa, pagarán un tipo elevado de intereses por los capitales de explotación y se hallarán, en definitiva, con que aún sus mismos productos exportables, representan escasamente el aumento de gravámenes que ha costado la tierra, el capital de explotación, el trabajo de mano y su propia industria ó esfuerzo personal.

No reseñaremos la condición que la crisis de la moneda ha traído para la minería, porque la postración de esta industria se complica con causas externas sobradamente notorias.

Nula ó casi nula como es la industria fabril del país, no tendríamos para qué ocuparnos de su condición actual.

Quedaríanos por analizar la condición de los empleados á sueldo y de los jornaleros, sean aquéllos fiscales ó particulares, sean estos últimos de los campos ó de las ciudades.

Y éste es precisamente el término y la meta hacia la cual se encaminaban nuestras demostraciones.

Nosotros afirmamos que no es exacto que tengan estas categorías sociales una situación excepcional por causa de la depreciación de la moneda.

Esa condición es absoluta y únicamente la misma, mismísima, que afecta á todos los demás obreros de la actividad económica nacional.

El poder de cambio de los sueldos fiscales ó particulares baja para el empleado en la misma exacta proporción que disminuyen las rentas del ahorro, las utilidades de

la industria, los emolumentos de las profesiones liberales, los beneficios de las instituciones de crédito y los jornales del trabajo.

¿Cómo se pretende entonces que exista sólo una categoría de ciudadanos, los empleados públicos, que deban tener una situación excepcional?

¿A virtud de cuáles privilegios la comunidad nacional se halla obligada á colocar á los empleados fiscales fuera del alcance de las crisis que afectan uniformemente á todos sus miembros?

Se necesita, á la verdad, hacer violencia á las nociones de justicia más elementales, para convertir al Estado, que es la representación de todos los intereses y del igual derecho de todos los miembros de la comunidad nacional; en una sociedad aseguradora de la condición y del bienestar de una de sus clases, á costa de los recursos y de los sacrificios de todas las demás categorías de la sociedad.

Si como lo afirman las declaraciones ministeriales, *sobrarán* en las arcas públicas, más de quince millones de pesos después de hecha la conversión; nada sería más cuerdo, más útil y sobre todo, más justo, que distribuir esos recursos, por el órgano de la administración pública, entre *todos* sus legítimos dueños, los contribuyentes nacionales.

La noción única que legitima las exacciones tributarias, son las necesidades de la administración y de la seguridad común.

Más allá de estos límites estrictos, todo impuesto es atentatorio contra el derecho de propiedad, es una exacción ilegítima é injusta.

Si se recaudan dineros de los contribuyentes en exceso de las necesidades públicas, esos dineros deben destinarse á beneficios comunes de los erogantes ó á fondos de reserva para las eventualidades del futuro.

¿Será este país tan admirablemente organizado que no se encuentren necesidades públicas á las cuales atender con las rentas del impuesto?

¿No habría caminos carreteros, líneas férreas, muelles y puentes por construir; para estimular y desarrollar la industria y la producción del país?

¿Es tan perfecta la seguridad personal, son tan completas las obras de saneamiento de nuestras ciudades, son tan vastos los servicios de la asistencia pública, es tan satisfactorio el estado de nuestros ferrocarriles y demás bienes nacionales; para que podamos prescindir de todas estas y otras infinitas exigencias del bienestar común y destinar á gratificaciones y sobre-sueldos los pretendidos sobrantes fiscales?

Todas y cada una de aquellas obras y servicios serían propias y serían, sobre todo legítimas, para emplear *los dineros sobrantes* de la comunidad, siempre que la hipótesis de la existencia de tales sobrantes, que hasta ahora hemos aceptado como exacta, no se prestase á las más justificadas denegaciones.

VII

Y, en verdad, no es éste tampoco el terreno propio del debate, porque no es exacto que el país tenga *rentas excedentes* de las cuales disponer, no diremos en obsequio exclusivo de sus recaudadores, pero ni siquiera en objetos de beneficio común y legítimo.

La comunidad del Fisco con la industria salitrera, fuente exclusiva de los pretendidos sobrantes fiscales, es simple y sencillamente la explotación en sociedad de una riqueza esencialmente limitada y agotable, como todas las riquezas mineras.

Los beneficios mineros no constituyen *rentas*, porque son transitorios y eventuales.

Si un industrial cualquiera estimare como entradas de carácter estable y duradero, los alcances de su mina y fijase sobre ellos el presupuesto anual de sus gastos, sería considerado como un disipador y un loco.

Pues no es otra cosa lo que nosotros venimos haciendo con las cuantiosísimas rentas del salitre.

¡Veinticuatro millones de libras esterlinas, se han vaciado sobre las arcas públicas, en forma de derechos fiscales de la exportación de salitres!

El país sabe que junto con consumirse, íntegra y estérilmente, esas enormes sumas de dinero, se ha aumentado la deuda pública exterior y han crecido los impuestos locales y el costo de los servicios públicos.

El país sabe todavía y, esto es lo más doloroso, que los producidos del salitre, que *son capitales y no rentas*, se han destinado hasta hoy, en casi la totalidad de su cuantía, en armar pieza por pieza, una ampulosísima y compleja máquina administrativa, que crece y crece sin cesar.

Es así como estas rentas del salitre han inflado inverosimilmente los presupuestos públicos desde los 17 millones de 1878 á los 80 millones que nos amenazan para 1895.

Y bien, el salitre se agotará en plazo, más ó menos, breve, como es indispensable.

Los distintos cálculos científicos que se han hecho sobre la probable duración de estas substancias, la fijan como término medio, en treinta años de *la actual* explotación, lo que apenas es un día en la vida de las naciones.

Si, entre tanto, no se van formando reservas con los mismos productos de tales riquezas, si éstas que ahora se llaman, impropia é inexactamente, «*entradas sobrantes* del Erario público,» se han de distribuir, por la sola razón de que existen, en las insaciables exigencias de la administración, llegará un día en el cual nos hallemos privados del sesenta ó tal vez del ochenta por ciento de las rentas públicas, y en la cruel pero inevitable necesidad de echar á la calle á la mayoría de los empleados fiscales y de desarmar violentamente la mayor parte de los servicios administrativos.

Las más elementales nociones de previsión, nos compelen á formar reservas con la riqueza salitrera que permitan afrontar las eventualidades del porvenir.

Es una vergüenza para las tradiciones de cordura y de sobriedad que han sido el rasgo más característico y más preciado de la administración pública de este país, que de la noche á la mañana, nos hayamos convertido en disipadores.

No parece sino que pesara una maldición sobre los poseedores de estas riquezas del desierto.

Ayer era el Perú el que hundía en estas vorágines de prodigalidades, su presente y su porvenir.

¿Habríamos de seguirle en esa triste senda?

La historia de los quince años que lleva de existencia nuestro dominio de Tarapacá, no puede ser más amenazante.

Pero, por lo mismo, es fuerza que nos detengamos en esta resbaladiza pendiente.

No es posible olvidar que durante los años que han seguido á la catástrofe de 1891, hemos visto aumentos provisorios, acordados por decretos y aumentos definitivos establecidos por ley en los sueldos del ejército y de la armada, gratificaciones y sobre-sueldos á los empleados de ferrocarriles, de aduanas y á los de la magistratura judicial.

¿Cómo pudiera ser prudente ni discreto que á raiz de esos sucesos *recientes* y sin consideración alguna á su significado y á su alcance, se propongan nuevos aumentos *generales* y, nada menos, que la mitad del total de los sueldos, á toda la familia de los pensionistas del Estado, con jubilaciones y pensiones de gracia inclusive?

¿Es así como se piensa alcanzar el restablecimiento económico del país?

¿Podrá llegarse jamás, por semejante camino, á la circulación metálica?

¿Alcanzaríamos alguna vez el equilibrio en los intercambios?

No es el menos grave de los inconvenientes de la idea que impugnamos, el que ella arrastre con adhesiones, forzadas y violentas, de cuantos posponen su convicción á su egoismo.

Y es perfectamente natural, que en la disyuntiva de herir aspiraciones é intereses *personales* de una porción

excogida de individualidades y sacrificar los intereses, inmensamente más débiles, porque son colectivos y anónimos, de la comunidad; se opte sin trepidación por los primeros y se releguen al olvido los últimos.

¿A quién le faltaría entre la numerosa falange de los agraciados con este proyecto, estrechas relaciones de sociedad ó de compañerismo, amigos y aun deudos cuya suerte y cuyo bienestar le interese vivamente?

Por esto es que debe estimarse como doblemente delicada la iniciativa de este linaje de ideas que envuelven una transcendencia tan considerable para el presente y el porvenir económico del país y que, al propio tiempo, levantan conflictos tan dolorosos entre la conciencia y el sentimiento del legislador.

Por fortuna, nosotros estimamos que combatiendo la duplicación general y en masa de los sueldos de los empleados públicos, de las jubilaciones y pensiones pías; se sirve, á la vez, los intereses de la justicia y los propios intereses personales de los agraciados.

Porque es incuestionable que la idea que analizamos é impugnamos, aleja, dificulta é imposibilita el advenimiento, más ó menos próximo, *del pago total* y *permanente* de los sueldos en buena moneda metálica.

Nada, en efecto, es más curioso de observar, que la guerra declarada que este pensamiento hace al proyecto de la conversión.

Sería de creer que un propósito oculto, muy hábil y muy finamente escondido, propósito de abierta hostilidad contra la ley del 92, inspiraba el fondo del proyecto que estudiamos.

Querría ese proyecto que, á contar desde el 1.° de enero próximo, los empleados públicos, activos y cesantes y hasta los agraciados con pensiones pías de la nación; quedaran con el privilegio, ó más bien, con el monopolio, de recibir la remuneración de su trabajo en la

moneda de oro de 24 peniques ideada por la ley de nuestra referencia.

Por manera que convertiríase á esas categorías de ciudadanos, en productores de artículos de exportación y vendedores de letras de cambio, ó lo que tanto vale, en vendedores de oro.

Y, como asciende próximamente á 800,000 pesos mensuales, según los cálculos del *Mercurio*, la suma de oro que debería pagarse á los pensionistas del Estado, tendríamos que en los dieziocho meses que transcurrirían entre el 1.° de enero próximo y el día designado para los canjes del 96, los empleados habrían vendido oro por valor de $ 14.400,000 de 24 peniques. Es decir, que esos funcionarios habrían hecho salir de Chile todo el oro y todo el valor de las pastas metálicas que actualmente existen acumuladas para la conversión, después de dos años de sacrificios y de estrecheces del país ($ 10.855,027-16 según el último estado de la Dirección del Tesoro) y cuatro y medio millones más de los que tengan que recaudarse en lo futuro.

De manera que la mitad exactamente de las sumas de oro que se necesitan para los canjes del 1.° de julio de 1896, estarían en poder de los acreedores de Chile en el extranjero cuando llegase el momento de canjear el papel por circulante metálico.

De lo cual resulta, en definitiva, que debido á la propia inspiración de la ley, se habría anticipado en año y medio la inevitable exportación de una parte del oro de los canjes y que después de tantos estragos como los que llevan causados las leyes del 92 y 93, nos hallaríamos con que todo aquello había sido una fantasmagoría y un propósito burlado por su propio autor.

¿Pudiera esto convenir á los intereses personales de los agraciados con la munificencia gubernativa?

¿Renunciarían los empleados á la expectativa de

tener alguna vez sueldos pagados, total y permanentemente en metálico, por recibir desde luego, dieziocho meses de gratificaciones extraordinarias?

Sería necesario suponer de muy mal criterio ó de una voracidad imprevisora á las gentes más ilustradas y más perspicaces de nuestra sociedad, para creer que pudiesen optar por el último término de esta inevitable disyuntiva.

No proceden con otro criterio los hijos de familia que estimulan las prodigalidades de un padre débil y malgastan en festines de un día, los ahorros que debieran asegurar su porvenir.

VIII

Entre tanto, el proyecto que venimos estudiando y comentando, es un espécimen característico de las tendencias que, por desgracia, han encontrado favor y predominio en la política económica nacional durante los años últimos.

Parece que se acechara el más insignificante síntoma de reacción contra esa política, para sofocarle y ahogarle antes que tome cuerpo.

Se había clamado, en todos los tonos, contra los resultados desastrosos de las leyes del 92, se habían señalado sus efectos prácticos en el tipo de los cambios, en el alza de los intereses, en las restricciones del crédito, en las dificultades del comercio, en la estagnación de las transacciones y, por fin, en la ola de miseria que viene invadiéndonos de prisa.

Prestando oído al lamento general y como disponiéndose á atenderle, S. E. el Presidente de la República, había dicho en su mensaje de 1.° de junio:

"La influencia desfavorable que ha tenido en nuestro estado económico la baja de la plata y del trigo, la mala cosecha del presente año, la depresión del cambio internacional hasta límites no previstos y la desconfianza y

la tirantez que se ha producido en el crédito; *no son ciertamente elementos propicios para la abolición del curso forzoso.*»

Y con este concepto general de la condición económica del país, el Supremo Magistrado de la nación, obedeciendo á sus altísimos deberes, añadía:

«Cúmpleme manifestaros que el Gobierno está dispuesto á aceptar y *aún á proponer* la reforma de esas leyes, *en lo que sea necesario para aliviar el estado económico o financiero del país.*»

Y bien ¿cómo se ha cumplido esta levantada y patriótica promesa?

¿Se aliviará la condición *económica* del país imponiendo á los bancos, es decir *al industrial, al deudor*, un gravámen de tres por ciento por el monto de las emisiones que el Estado tome bajo su responsabilidad mientras dure el curso forzozo?

¿Se darán más letras al comercio nacional cambiando el asiento del impuesto en oro y cargando á *la exportación* lo que hoi paga *la internación*?

¿O será acaso *un alivio mui considerable para la condición económica del país* que se distribuya á los empleados *diez millones de pesos anuales en oro de 24d*, mientras la industria y el comercio nacional no disponen sino del depreciado circulante que le depara la condición de nuestros intercambios?

La verdad es que la traducción del pensamiento presidencial, hecha en los proyectos que examinamos, es de la más dudosa fidelidad.

Hay quienes se felicitan de que se habilite á los empleados para *exportar* diez millones anuales de oro de 24 peniques, porque esta masa de valores, producirá una alza en el tipo de cambio.

El hecho es, á todas luces, manifiesto é incuestionable.

Mientras el oro de los empleados esté saliendo de Chile, el mercado dispondrá de *un millón de libras anuales en exceso* de todo el monto de nuestros productos de retorno.

Para los efectos de la cotización de los cambios, la medida que analizamos importa exactamente lo mismo que haber hecho un nuevo empréstito exterior de £ 1.500,000, que debiera realizarse por medio de giros iguales, en dieziocho mensualidades consecutivas.

Sabemos prácticamente cuáles son los efectos de esta clase de operaciones.

El auxilio extraordinario que importa para un mercado la introducción de estos valores de empréstitos externos, alivia momentáneamente la condición de los intercambios para perturbarla y reagravarla más tarde cuando, consumido el dinero, comienza la necesidad de servir la nueva deuda junto con las antiguas.

Así se pasaron las cosas cuando se realizó el empréstito de 1892.

Los primeros giros del Gobierno contra esos recursos extraordinarios, se iniciaron á 20 5/8 peniques para terminar á 16 y para llevarnos en seguida hasta las extremas cotizaciones actuales.

De todo punto análogos serían los fenómenos que presenciáramos con la exportación del oro de los empleados.

Es evidente que un millón de libras anuales lanzadas á los mercados nacionales por el órgano de los pensionistas del Estado, levantarían momentáneamente el cambio, mientras durase la salida de la moneda, para dejarle en condiciones mucho más abatidas que las de hoy. Siquiera el oro que se giraba en 1892 sirvió para cancelar en parte obligaciones del tesoro público para con los bancos, mientras que el que vendieran hoy los empleados, vaciando las cajas de la conversión de 1896, no tendrían ciertamente inversiones muy reproductivas.

Hacia otros horizontes muy diversos debieran, á nuestro juicio, encaminarse las miradas de gobernantes y legisladores.

Estimando las rentas del salitre, en su único verdadero carácter, de recursos transitorios y eventualísimos, se impone el deber ineludible y elemental de guardarlas como preciosas reservas para afrontar las responsabilidades del porvenir y para cimentar, en el presente, nuestra situación y nuestro crédito.

Aparte de aquellos gastos que tuvieran un carácter muy justificadamente reproductivo y útil para la implantación ó el desarrollo de las industrias, todos, absolutamente todos los fondos sobrantes provinientes del salitre, deberían destinarse á crear *la gran reserva nacional.*

En este sentido, nada sería más cuerdo, por ejemplo, que dedicar los quince millones de pesos que anuncia el proyecto ministerial, como sobrantes del erario público, después de hecha la conversión, al rescate de las propias obligaciones de la deuda externa del país.

Esos quince millones así invertidos, nos permitirían amortizar extraordinariamente á 84%, obligaciones emitidas al 96%.

No podría desearse una *conversión de deudas* más ventajosa.

Todos los gobernantes celosos de los altos intereses de su representación, se han apresurado siempre á realizar esta clase de operaciones, aún cuando sus resultados no fuesen, ni con mucho, tan claros ni tan redondamente benéficos como el que proponemos.

Por lo que á nosotros toca, no trepidaríamos un instante en dar, esta ú otras destinaciones análogas, no ya sólo á los quince millones de pesos que el proyecto ministerial anuncia como excedentes en 1896, sino á todos los fondos estérilmente inmovilizados y empozados en las arcas fiscales.

Es á todas luces manifiesto, que para los propósitos mismos de la conversión, valdría infinitamente más esta forma de reservas que la señalada en la ley de 1892.

Si tuviéramos en Londres, invertidos en títulos de nuestra propia deuda, los 29.000,000 de pesos que se están amontonando en las bóvedas de la Casa de Moneda, se obtendría, desde luego, un interés de cuatro y medio por ciento oro sobre el monto de esta reserva. Disminuiría, en consecuencia, el saldo pasivo de nuestros intercabios en la propia suma de los intereses economizados y, cuando la condición económica del país lo aconsejare ó lo permitiere, se enajenarían esos títulos por oro de 48 peniques para realizar con su producto la conversión del circulante nacional.

Es un fenómeno muy digno de meditación y estudio la tendencia á *singularizarnos* que revelan nuestras leyes.

Y precisamente en esta materia de reformas económicas, en la cual tan peligrosas y tan delicadas son las originalidades y los inventos, es donde se ha ostentado un mayor empuje de fantasía y de novedad.

No volveremos sobre las peculiarísimas disposiciones de las leyes del 92 y 93, ni sobre la persistencia, verdaderamente singular, de canjear á plazo fijo el circulante fiduciario de 12 peniques por una moneda *sui generis* y *única* también en los mercados del mundo, de 24 peniques de valor.

Conviene, sí, recordar que en este mismo punto concreto que hemos venido analizando, seríamos nosotros el primer país del mundo que hallándonos en notorio y gravísimo desequilibrio económico, propusiéramos, como medio de conjurarlo, una incesante inflación de los gastos públicos, entre los cuales figuran en primera línae estos indefinidos aumentos de sueldos fiscales.

Es revelador, á este propósito, el contraste de nuestra política económica con la que están desarrollando, en

estos mismos instantes, con ánimo levantado y mano firme, nuestros vecinos de allende los Andes.

Allí, como acá, hay desequilibrio económico, hay déficits en la balanza de los intercambios.

Eso sí que los saldos deudores del comercio argentino, son muchísimo más considerables que los nuestros.

Allí, como acá, hay papel moneda de curso forzoso, con la diferencia de que el total de las emisiones chilenas (29.000,000) es apenas el diez por ciento de circulante fiduciario argentino que monta a $ 300 millones.

El cambio, entretanto, alcanza en aquel país cotizaciones mucho más ventajosas que las vigentes en estas plazas.

El fenómeno, al parecer inexplicable, es sin embargo sencillísimo de comprender porque, como lo hemos dicho de antemano, en la Argentina nadie ha imaginado, ni en sueños, *quemar sus trescientos millones de emisión fiduciaria* para reemplazarlos por una moneda de oro comprada á los mercados extranjeros, con sacrificios dolorosísimos de la fortuna pública y destinada á volver hacia las plazas acreedoras del país, rápida é inevitablemente, tan pronto como hubiera de entregársela á la circulación.

En la Argentina se dedican al aumento de la producción y á la nacionalización de sus industrias, hecha por el resorte de las leyes aduaneras, los esfuerzos que aquí se gastan en atesorar recursos destinados á una conversión prematura é imposible, por el momento, con daño del crédito y de las fuerzas productivas del país.

Pero sin entrar en el desenvolvimiento de esos distintos ideales y tendencias diversas de la política económica de uno y otro país, tarea que nos llevaría demasiado lejos, es instructivo y revelador, como lo decíamos poco há, recordar lo que está pasando en estos mismos instantes, en orden al punto concreto que nos ocupa.

Mientras que en la Argentina se están suprimiendo legaciones y oficinas administrativas completas, reorganizándose otras, para reducir el presupuesto de los gastos públicos y formar un fondo de reserva con las entradas sobrantes, fondo que alcanzaba, á la fecha de las últimas noticias, á 28 millones de pesos, aquí, por la inversa, aumentamos día por día la grandiosidad de nuestra máquina administrativa y á falta de nuevos rodajes que añadirle, nos proponemos distribuir entre los pensionistas del Estado los recursos *extraordinarios* que precaria, eventual y transitoriamente nos está produciendo una riqueza minera.

No faltan, por lo tanto, razones para que la Argentina, con un saldo pasivo de 12 millones de libras en su balanza de intercambios, con $ 400 millones de deuda pública y con 300 millones de emisión fiduciaria; tenga mejores cambios que nosotros con la cuarta parte de deuda exterior, con noventa por ciento menos de papel de curso forzoso y con un saldo pasivo muchísimo más reducido en los intercambios.

Pasma, á las veces, la fecundidad con la cual nuestros estadistas y economistas encuentran motivos para sustentar las tesis más bizarras.

Hemos leído recientemente en alguno de los artículos de fondo de la prensa diaria, que una de las ventajas más considerables que reportará el pago de sueldos y pensiones pías en oro de 24d, será la de *facilitar la circulación* de la nueva moneda que sería lanzada á los mercados nacionales, *sin la odiosa intervención de los bancos*, por miles de manos que la distribuirían en todos los centros del país.

Se nos ocurre, desde luego, que no habría para qué preocuparse muy considerablemente de los medios de hacer la circulación del oro.

De esa tarea se encargaría, tan expedita como eficaz-

mente, el comercio nacional, sea con la intervención de los bancos ó la de los empleados, ó sin ninguna de ellas. Colóquese el oro en un mesón cualquiera de la Casa de Moneda, no diremos para canjearle por papel de 12 peniques, sino para venderle al precio corriente de plaza y se verá cómo al día siguiente, el admirable mecanismo de las corrientes naturales del comercio, lo lleva hacia todos los vientos.

Y, lo que hay de cierto es que, en estos momentos, el viaje sería largo, muy largo y la circulación tan rápida, que iría á parar demasiado lejos y no le volveríamos á divisar tan pronto.

Durante los primeros años del período de la inconvertibilidad en los Estados Unidos, la ley obligaba al comercio, como entre nosotros, á pagar los derechos de aduana en oro. Pero, á fin de que esta obligación no se tradujese para el comercio en la necesidad de comprar ese artículo á los mercados extraños, lo cual habría reagravado la condición económica del país, el Gobierno pagaba también en oro, *no ya los sueldos de los empleados fiscales*, idea que no apareció jamás en aquel país á pesar de los extremos á que alcanzara la depreciación de la moneda, sino los *intereses de la deuda interna*. Se creía y con razón, que para ser lógicos y justos, no era dable exigir oro en pago del impuesto, sin entregarle también á los acreedores del país. El derecho debía ser correlativo del deber; y si el Fisco cobraba impuestos en oro, era fuerza que en este mismo metal cubriese sus obligaciones.

Pues bien, la masa de circulante metálico que durante casi todo el período de la inconvertibilidad desempeñó estas dobles funciones, era entregada por el comercio á las aduanas y recojida después del Fisco ó de sus acreedores, sin la intervención de entidades extrañas y por el simple juego normal de las transacciones.

Nadie imaginó en los Estados Unidos que fuera necesario inventar cauces de artificio para la circulación de moneda.

Con absoluta prescindencia de cuanto llevamos expuesto en orden á la idea en análisis y muy por encima de todas las consideraciones de conveniencia y de justicia que condenan este proyecto, habría otra razón de alta política que por sí sola debería imponer su rechazo.

En un país pobre, con industrias abatidas por la decadencia del precio de sus productos en los mercados de consumo, con dificultades crecientes en el crédito, con intereses elevados, sin horizonte alguno de trabajos remunerativos; es una soberana temeridad estar cebando día á día el estímulo por el asalto de los puestos públicos.

Pudiera decirse, sin temor de incurrir en exajeraciones, que la mitad de las gentes hábiles para el trabajo en este país, aspiran á enrolarse en la legión de los pensionistas del Estado.

Y si este síntoma que es característico de nuestra condición económica, se produce en la actualidad y ha venido observándose desde tiempo atrás ¿cuántos grados marcaría esta fiebre ya endémica, el día en que los empleados públicos tuvieren situaciones excepcionales al abrigo de las crisis que afectan á todo el resto de los habitantes del país?

Ya es bastante numerosa y difícil de comprender la clasificación de los distintos partidos políticos de este país, de sus impalpables diferencias de doctrinas y de sus nebulosas diversificaciones de credos ó de tendencias.

Pero, si el tesoro público acabara de convertirse en el *único objetivo* de las aspiraciones comunes y de las miradas famélicas de un pueblo empobrecido; no sería posible contar ni, muchísimo menos comprender, el número, el

nombre y el color de las banderas que se alzarían en perpetuo choque al rededor de la magna presa.

La última de las calamidades que pudieran sobrevenirnos, sería la de convertir la riqueza salitrera en causa eficiente de la anarquía del país.

IX

Nos había anunciado S. E. el Presidente de la República en su último Mensaje al Congreso, que se daría término al pago en oro de una cuota de los derechos de aduana.

Teníamos anticipados nuestros aplausos sin reserva á esa medida tan de antiguo reclamada por la opinión.

¿Cómo traduce, ahora, el proyecto ministerial este pensamiento á todas luces benéfico y destinado á producir un inmediato alivio al comercio y al país?

Sensible es decir que la reforma anunciada mantiene y, lo que es peor, reagrava las disposiciones vigentes de las leyes del 92 y 93.

Porque, en efecto, si se ha atacado el pago en oro de los derechos de aduana, si se ha pedido la supresión de esta forma del impuesto, es sencillamente por cuanto estrecha á pura pérdida la situación de los mercados nacionales, obligándoles á comprar el oro que deben entregar á las aduanas y aumentando con este nuevo ítem de internaciones extranjeras, el saldo adverso de la balanza de intercambios.

Las £400,000 anuales que las aduanas han venido recogiendo durante la vigencia de las leyes de conversión, *para empozarlas en las arcas fiscales*, son otros tantos va-

lores añadidos al déficit de los intercambios. El mercado de letras, abatido por las deficiencias de la exportación *nacional*, ha tenido que postrarse más y más en fuerza de la competencia que le hace el Fisco, ó sea, la Caja de Conversión, exigiéndole productos de retorno por el mayor valor de esas £400,000 que el exhausto comercio nacional ha tenido que comprar en oro con papel de 12 peniques.

Esta dañina y absurda disposición de la ley, ha traído un sobre-precio artificial en el tipo de las letras, de cuantía imposible de precisar, pero, en todo caso, mui considerable.

Pues bien, cuando después de mucho esfuerzos de discusión corroborados por el curso de los acontecimientos, se había logrado que reconocieran nuestros gobernantes los efectos perturbadores de esta medida condenada por la ciencia y la experiencia universal, nos hallamos con que se ha cedido en el nombre y en las apariencias de la cosa, conservando intacta su esencia y su carácter.

Tanto vale, en realidad, obligar al comercio nacional á comprar £400,000 oro anuales, como *quitarle* esas mismas £400,000 que ofrecían á nuestros mercados los productores de salitre y que, según el proyecto gubernativo, irán á las cajas fiscales á reemplazar las que pagaban los internadores.

Se cambia, pues, simplemente el asiento del impuesto en oro.

Hasta hoy le pagaba la *internación*; desde mañana le cubriría la *exportación*.

Lo que es al comercio nacional, una y otra cosa, le traen los mismísimos resultados.

La escasez de letras se mantendrá en igual escala, sea que se obligue á entregarlas al fisco á la entrada ó á la salida del país.

Para esto no valía, por cierto, la pena de cambiar la forma de la ley.

Los cuatro millones de pesos de 24 peniques que el proyecto quiere sacar *de la exportación* para la caja de los canjes, son, ni más ni menos, las £ 400,000 que las aduanas recojen hoy con el mismo objeto, *de las internaciones*.

Creemos que es todavía muy preferible la situación actual, á la que crearía esta reforma.

Siquiera hoy no se encuentra el fisco en la necesidad de convertirse en vendedor de letras, como tendría que serlo mañana, por los saldos excedentes del impuesto de salitres y yodos.

Vale infinitamente más que estos valores se cambien en el juego normal de las transacciones libres de la industria y del comercio, que crear la intromisión del Estado en asuntos ajenos á su competencia y á sus funciones.

Ayer tan sólo se lamentaban las facilidades y los estímulos que daba á la especulación, la venta hecha por el Estado de las letras provinientes del último empréstito.

Mucho más serios y mas graves podrían ser los inconvenientes del remate del oro ó de las letras que quedaren como excedentes del impuesto del salitre.

El campo sería más vasto y la acción más permanente para las elucubraciones del agio y las incitaciones de la especulación y del juego.

No conviene tampoco abusar de la confianza, hasta hoy muy legítima, que nos inspira la pureza de los funcionarios públicos á quienes se sacaría de su papel para encomendarles verdaderas y permanentes comisiones comerciales. Hay en esto un peligro que aún cuando se nos represente como muy remoto, es cuerdo precaver.

Hé aquí por qué, en definitiva, nosotros que hemos venido combatiendo sin tregua el pago en oro de una cuota de los derechos de aduana, optamos hoy por que se man-

tenga esta parte de la ley en vigencia, antes que sustituirla por el proyecto que analizamos.

Si lo que hay de verdad es que, según el concepto gubernativo, debe subordinarse todo interés público á la necesidad de seguir formando reservas en oro, dígaselo francamente, y manténgase la forma en la cual se hacen hoy esas acumulaciones porque vale mucho más, ó mejor dicho, es menos mala, que aquélla por la cual se propone reemplazarla.

X

Tenemos anticipado el análisis de la tercera idea contenida en el proyecto que estudiamos, esto es, la que autoriza la sustitución del billete bancario por el fiscal.

Sin repetir la crítica de esta disposición, nos limitaremos á poner de manifiesto las notorias contradicciones que se notan entre los propósitos y fundamentos de esta reforma, según el mensaje de S. E. el Presidente de la República y los términos en los cuales esa idea ha llegado á la consideración legislativa.

Sería inútil declarar que aceptamos el fondo de este pensamiento ya que nos ha cabido el honor de iniciarle en la prensa desde abril de 1893.

Lo que no podríamos igualmente aceptar, es la dureza innecesaria é injustificada de su forma.

Cuando S. E. el Presidente de la República anunciaba en su mensaje la próxima presentación de este proyecto y del otro que suspende el pago en oro de los derechos de internación; les hacía preceder de estas consideraciones bien precisas:

«El primero tendrá por objeto hacer fiscal el actual billete de banco. El Estado se haría cargo de su pago y el banco pasaría á ser deudor del Estado.»

»Creo que esta medida *que lleva envuelta la anulación de la gabela impuesta á los establecimientos emisores de billetes al portador, de acumular oro en un tiempo dado, producirá desahogo y bienestar en los negocios*, sin imponer al país cargas que no pueda fácilmente sobrellevar.»

De manera que S. E. concebía esta idea de la sustitución del billete bancario por el fiscal, como un medio *de evitar gabelas á la industria*, como un recurso destinado *á procurar desahogo y bienestar á los negocios.*

Estos *y no otros* son los propósitos á los cuales obedecía este proyecto según el criterio presidencial.

En este sentido, el pensamiento que inspiró a S. E. la moción que hoy se somete al Congreso, fué todavía más amplio y más generoso que el que nosotros veníamos enunciando y apoyando desde 1893.

Porque, en realidad, nosotros considerábamos que el motivo fundamental que exigía esta reforma, era la necesidad de precaver los peligros que encierra la pluralidad de origen de la moneda fiduciaria en el régimen del curso forzoso.

Sólo en pos de esta consideración capital, añadíamos también la propia idea que S. E. expresa en su Mensaje, esto es, la conveniencia de libertar á los bancos de »la gabela de acumular oro en un tiempo dado,» gabela impuesta por el artículo 9.° de la ley de 31 de mayo de 1893.

Ahora bien, ¿cómo ha traducido el proyecto que analizamos el propósito que debía consagrar, según el concepto esplícito de S. E.?

El país lo ha visto, no sin extrañeza, estableciendo un gravamen de 3% sobre el monto de las emisiones que los bancos cediesen al Estado, lo cual no es, sin disputa, un medio muy práctico «de suprimir gabelas á la industria» ni resorte adecuado á producir «desahogo y bienestar en los negocios.» Es manifiesto que serían los *in-*

dustriales, los *deudores* los que, en definitiva, tendrían que cargar con tales gravámenes, en forma de elevados intereses.

Y la equidad, el fundamento legal y filosófico, la base económica del nuevo impuesto ¿dónde buscarles?

Se trata de gravar á los bancos por *el servicio* que se les hace *despojándoles en obsequio de la seguridad general* de uno de los ramos de su industria, privándoles de una fuente de beneficios de los cuales están en posesión con la autoridad de la ley.

Esto no requiere más comentarios y si alguno admitiese, sería la consideración de que la injusticia del gravamen es tanto más odiosa cuanto que es absolutamente innecesaria. El Fisco no ha menester, para objeto alguno útil, de los recursos que le trajera esta exacción.

Dando, por lo demás, de mano á estos puntos de mira desde los cuales teníamos contemplado el asunto que nos ocupa, añadiremos unas cuantas consideraciones que hacen relación con muy importantes detalles de esta materia.

Según el proyecto en análisis, no sería *obligatorio* sino *voluntario* para los bancos, canjear sus emisiones por los billetes fiscales.

Consideramos que este carácter atribuído á la idea que encarna el proyecto, frustra por completo su eficacia y su utilidad.

Y esto, por diversas razones que señalaremos á la ligera.

Lo que, ante todo, se persigue con esta reforma, es que mientras dure la incorvertibilidad, es decir, mientras el circulante nacional *sea de papel*, no puedan existir en el país *venticinco casas de amonedación* que prácticamente *y en el hecho* fabriquen la moneda que anda en manos de todos y de cada uno de los habitantes de la nación.

Si hasta hoy la solvencia de los establecimientor emi-

sores *de papel*, y la seriedad de sus procedimientos, nos han libertado de verdaderas catástrofes comerciales, nadie podría asegurar que continuásemos siendo felices hasta el fin. La historia flamante de los bancos de Italia y de Australia y lo que ha pasado, en época todavía muy reciente, con los bancos argentinos, debería servirnos de experiencia y elocuente ejemplo.

Otra consideración, no menos poderosa, para hacer *obligatorios* los canjes de que tratamos, es que la existencia de moneda fiduciaria *particular*, constituye un obstáculo casi insuperable para llegar al restablecimiento del circulante de especies.

Nunca pueden marchar paralelamente los recursos del Fisco con los de instituciones privadas, y cuando las facilidades de la conversión hubieren llegado para los unos, podrían muy bien faltar á los otros.

Es obvio, por último, que si la ley *no obliga* á los bancos á ceder temporalmente sus emisiones al Fisco, pudieran preferir esos establecimientos retirarlas de la circulación antes que pagar impuestos como el que imagina el proyecto gubernativo y antes de que se les compela á hacer las acumulaciones de oro estatuídas por el artículo 9.° de la ley de 31 de mayo del 93.

Y es manifiesto que en tal hipótesis, de muy probable realización, los mercados nacionales carecerían del circulante que indispensablemente necesitan para sus más premiosas necesidades.

Sí, pues, esta idea algo significa, si ella ha de conducirnos á resultados prácticos y benéficos, es de todo punto indispensable que se la haga *obligatoria*.

Y para hacerla *obligatoria*, dentro de la ley, de la equidad y de la conveniencia pública; es fuerza asimismo que ya que no se indemniza á los bancos, por la expropiación de sus emisiones, hecha en obsequio de la seguridad y del bienestar común, se les liberte, cuando menos,

de exacciones arbitrarias, gravosas para la industria y odiosamente inútiles como tributos en pro de un fisco repleto.

La cuarta y última idea que encierra el proyecto que analizamos, consiste en declarar exclusivamente aplicable al fondo de la conversión metálica, todo el precio de venta de las salitreras enajenadas el 15 del pasado junio y el de aquellas otras que deberán subastarse en octubre próximo.

Limitámosnos á expresar, en orden á este punto y en primer término, que, á nuestro juicio, debería derogarse en absoluto y sin pérdida de más tiempo, la ley de 29 de noviembre de 1893.

Ni una oficina, ni una sola pulgada más de terrenos salitrales deberían entregarse al capital colonizador de Tarapacá. La propiedad de la riqueza salitrera debería reservarse á la utilización exclusiva del elemento nacional. Muy latamente hemos expuesto nuestra manera de considerar el problema salitrero y acaso nos sea necesario volver más adelante sobre este punto, en esta ó en próxima oportunidad.

Creemos, en seguida, que aun cuando la ley del 93 hubiere de mantenerse y aun cuando la industria y el capital chileno, faltos de apoyo y de discreta protección, continúen eliminados de la explotación de los salitres, habría muchas destinaciones diversas é infinitamente más útiles que la indicada en el proyecto, para los fondos provinientes del precio de venta de las oficinas y terrenos salitrales.

Pero, junto con esto, declaramos que entre la condición actual de los recursos provinientes del salitre y la que propone el proyecto ministerial, optamos sin vacilar por esta última.

Es, sin disputa, muy preferible que el precio de venta de las salitreras se reserve con *cualquiera destinación ex-*

clusiva antes que esos fondos ingresen á la masa general de las rentas públicas.

Es ya historia vieja que esta clase de recursos pierden su carácter cuando ingresan á las cajas fiscales y que de ser beneficios mineros, rentas extraordinarias y eventuales de una explotación industrial transitoria, se tornan en el acto, en fuerza de un maravilloso poder de absorción y de naturalización que parecen tener los cofres del Estado, en «sobrantes comunes de las rentas públicas.»

De aquí á la tentación de dedicarles á las voraces é indefinidas exigencias administrativas, no hay sino un paso.

Conviene, por lo tanto, acojer sin tardanza la destinación exclusiva que da á esos fondos el proyecto ministerial.

XI

La primera de las conclusiones que se desprenden del presente estudio, es la ineludible necesidad de suspender los efectos de las leyes de 26 de noviembre de 1892 y 31 de mayo de 1893.

Cuando impugnábamos esas leyes *antes de dictárselas*, en septiembre de 1892, nadie se dió siquiera la pena de parar mientes en las razones que justificaban nuestras críticas.

Por aquella época, oponerse á la conversión metálica en nombre de su inoportunidad, de su impracticabilidad y de las ruinas que estaba llamada á producir; era sencillamente una extravagancia.

Fué tan unísono y tan universal el grito de gozo que se escapó de todos los labios cuando se descubriera, ó más bien, cuando se *importara* al país el específico aquel de la moneda de los 24 peniques, que no secundarle y, con mayor razón, contrariarle, era aceptar el odioso papel de turba-fiestas.

Se esperaba, con completa certidumbre, que á influencias de la ley de noviembre, cambiaría, como por obra de encantamiento, la condición económica del país, que el cambio subiría desde los 18 peniques, tipo al cual se cotizara en esa fecha, hasta los mismísimos 24 de la moneda ideada para verificar la conversión; que el crédito

del país en el exterior, convalecería sin tardanza; que las transacciones de nuestros mercados internos basadas en una moneda de valor estable, cobrarían inusitado vuelo; que liquidados, en fin, los compromisos y los negocios con asiento ficticio en la moneda fiduciaria, renaceríamos á vida nueva, sana, robusta y fructífera.

Seis meses apenas habían transcurrido desde la vigencia de la ley y ya los acontecimientos barrían con todas aquellas doradas expectativas.

Había sido necesario suspender *administrativamente* algunas de sus disposiciones porque la destrucción del circulante, combinada con la emisión de los bonos internacionales, nos colocó al borde de una crisis monetaria insoluble y de un cierra-bancos general.

El cambio, lejos de mejorar, siguió desde esa propia fecha la marcha penosa y uniformemente descendente que lleva hasta estos días.

No mejoró nuestro crédito en el exterior.

La producción nacional, en vez de cobrar bríos, sufrió, como era indispensable, los efectos del alza de los intereses y de las restricciones del crédito.

Inicióse el derrumbamiento de todos los valores de la fortuna mobiliaria, cuyo término no se divisa todavía.

Las acumulaciones de oro hechas por las aduanas para reunir el material de la nueva moneda, elevaron artificialmente el precio de las letras que el comercio nacional necesitaba para sus pagos y reagravaron el monto de los déficits del intercambio.

Subió el precio de los artículos extranjeros de consumo obligado para el rico y para el pobre.

Y, la depreciación de la moneda, que se creía combatir y que ha aumentado constante y fijamente desde esa época precisa, ha traído la estrechez á todos los hogares, el debilitamiento de la producción, la estagnación en los negocios, la anemia general del comercio.

Todo esto era mucho más, excesivamente más de lo que se requería como prueba práctica, evidenciada é incontrovertible; de la bondad de las combinaciones ideadas en 1892.

Pero, era tal el prestigio de aquellos arbitrios, que resistían victoriosamente á la desautorización de *los hechos* y cuando en mayo de 1893 fué necesario retocarles, se modificaron algunos detalles pero se conservó y se reforzó su base fundamental.

Así hemos caminado un año más.

El amplio debate abierto constantemente sobre este tema de vital interés nacional, ha logrado disipar muchos errores, alumbrar muchas conciencias extraviadas ó alucinadas y fijar muchos criterios vacilantes.

Nadie aguarda ya para mañana cambios á 24 peniques.

Poquísimos son los que continúan atribuyendo á la especulación, á la desconfianza ó al papel moneda; el maravilloso efecto de alterar todas las relaciones de valores que tienen su fundamento, ostensible, evidente y racional en el movimiento de nuestro comercio de intercambios, en la balanza de los créditos y de las obligaciones del país.

Rarísimos serán los que persistan en creer que pudiéramos quedarnos con el oro de la conversión y que manteniéndose los cambios á 24 peniques, fuera dable conservar un circulante que vale veinticuatro.

No hay quienes se atrevieran á sostener que fuera lícito, no diremos cuerdo ó conveniente, que el Estado pagase, en día fijo, 24 peniques por su emisión, si ésta no vale *comercialmente* sino 12.

Hemos llegado, por fin, á un instante en el cual, en realidad, no se discute, y en el cual sólo imperan las declamaciones y las imposiciones.

La conversión ha de llevarse adelante, se dice, por-

que es un empeño de honor del Gobierno, del Congreso y del país.

¡Cómo! ¡De cuándo acá una reforma económica, sometida como todas las de su linaje, á la razón suprema de la conveniencia pública, pudiera importar compromisos que afectasen el honor del país!

Hé aquí una aseveración verdaderamente grave, casi inexplicable.

Y, ¿con quién ó con quiénes habría tomado el país los supuestos compromisos *de honor?*

¿Serían los acreedores *extranjeros* del comercio chileno los que pudieran tocarnos la trompeta de Ruy Silva?

Si es evidente que esos señores han de tener vivísimo interés en llevarnos á toda costa á los canjes de 1896 que tan suculento provecho han de reportarles, porque serían ellos los que *exclusivamente* recogiesen la moneda de los 24 peniques, no sabemos de dónde nacería *su derecho* para imponernos el estéril sacrificio.

¿Acaso el país se ha comprometido á que los deudores del intercambio dispongan de tal ó cual clase de monedas para satisfacer sus compromisos?

Cuando los internadores abrieron créditos por motivos puramente comerciales, á sus correspondientes de Chile, ¿pudieron contar con las facilidades ó con los recursos que la nueva moneda, creada con posterioridad, habría de procurar á sus deudores?

Y estos últimos, á su turno, ¿con cuáles títulos pudieran pretender que se les proveyese de la nueva moneda para pagar sus obligaciones?

Porque adviértase que no sería ni siquiera equitativo que después que el consumidor nacional ha pagado sus consumos de mercaderías exóticas con papel de 12 peniques, tuviera todavía el deber de dar á sus proveedores una especie metálica de valor *doble* para incrementar

las utilidades de su comercio con una ganancia que, á este solo título, sería de ciento por ciento.

Busquemos, por lo tanto, en otro campo, las entidades á las cuales se atribuye el derecho de reclamarnos el cumplimiento del *compromiso de honor*.

¿Serían esas, por ventura, los acaparadores del papel fiscal?

Pero, es que la ley del 92 no se hizo para dar base á especulaciones de esta naturaleza.

El país no podría tolerar que se le compeliese á sacrificios dolorosísimos con el fin ostensible de proveerle de circulante metálico y con el objeto real de venderle á 24 peniques un papel que se habría recogido y almacenado para tal fin, adquiriéndole por la mitad de ese costo.

Esta hipótesis es de tal carácter, que no atribuímos á nadie el propósito de prohijarla.

¿Quiénes serían, entonces, los que nos reclamasen el supuesto compromiso?

¿Los empleados fiscales?

¿Los que viven de remuneraciones fijas acordas por la industria particular?

Pero, es que aún suponiendo en estas numerosas y respetables clases de nuestra sociedad, un egoísmo del cual no las inculparíamos nosotros, no sabríamos tampoco de cuáles fuentes arrancaría su derecho para pretender colocarse en una situación excepcional, exigiendo el cumplimiento de leyes aniquiladoras de la riqueza pública y desastrosas para los intereses generales de la comunidad.

Seríamos nosotros, el único pueblo del mundo que nos hubiéramos creído ligados por este género de *compromisos de honor* y que, para llenarles, arrostrásemos con todos los desastres imaginables.

La Rusia, por ejemplo, *vive deshonrada*, desde hace

más de un siglo, porque en nueve ocasiones distintas se ha propuesto convertir su circulante fiduciario y ha retrocedido patrióticamente ante las dificultades de la empresa.

La Gran Bretaña se cubrió de oprobio postergando por veinticuatro años el curso forzoso, adoptado para brevísimos días.

Y el imperio Austro-Húngaro que ha retrocedido en sus diversos intentos de conversión hasta por una diferencia *de 4% entre el valor de su papel y el tipo de los cambios*, ya no debería tener el coraje de formar parte de la comunidad de las naciones *honradas*.

Son estos los extremos á los cuales conduce el abuso del concepto, que mira, ante todo, á la sonoridad retórica.

En el fondo de este problema, no caben argumentaciones de este carácter.

Para mantener ó para suspender la conversión, no son elementos decisivos sino los que se derivan *única y exclusivamente* de la conveniencia ó inconveniencia de la medida.

La ley de 1892 quiso mirar al bien público, creyó atender á las conveniencias nacionales, y por eso, únicamente por eso, fué dictada.

Si hoy *los hechos* convencen de error á legisladores y gobernantes, el deber y el patriotismo les trazan el camino *único* cuerdo y levantado que debieran seguir.

Mantengan la ley los que todavía creen en su eficacia, los que no divisan las ruinas que están amontonando, los que interpretan paradójica ó erróneamente *los hechos*.

Pero, no se diga que el país se halla ligado con pretendidos compromisos indeclinables de honor que debe cumplir á costa de cualquier sacrificio, porque esta clase de argumentaciones, que nada significan en el fondo, son más propias para producir efectos oratorios que para con-

vencer, más adecuadas al meeting que al parlamento; inhábiles, en todo caso, como elementos de un debate útil.

Y, por desgracia, van haciendo escuela, casi van apareciendo como un sistema estos recursos *impresionistas*.

Cada vez que indirecta ó incidentalmente se ha tocado en el Congreso este tema de la conversión metálica, cada vez que se ha creído que una medida ó una idea cualquiera podía tener el efecto de dañar ó siquiera de postergar ligeramente el día señalado para los canjes; han desempeñado interesantísimo papel en los debates, las necesidades y las conveniencias *de los pobres* que reclaman, como su salvación, la moneda metálica, necesidades que se contraponen, por cierto, á los egoismos *de los ricos* á quienes beneficia la permanencia del papel.

Se comprenderá, desde luego, que la exactitud de la observación deja mucho que desear.

Son precisamente *los ricos* quienes pudieran locupletarse y quienes se llenarían, en realidad, si fuera posible ir sin tropiezos á los canjes del 96. Las gentes sin recursos, los que consumen el valor de su trabajo diario en las exigencias de la vida, ésas no tienen jamás participación en estos magnos jubileos.

Pero, la verdad es, que se desquician y se desnaturalizan estos debates, colocándoles en este falsísimo terreno.

Porque si hay algún orden de intereses estrechamente solidarios y armónicos, para todas las clases y categorías sociales, son los intereses económicos.

Lo que daña al rico refluye sobre el pobre en forma y grado inmensamente más cruel y doloroso para el último que para el primero.

De suerte que si fuese exacto que la conversión metálica perturba la condición de las gentes de fortuna, la influencia de estas perturbaciones iría á dañar, antes que

á nadie, á los indigentes y desvalidos que careciendo de trabajo no tendrían de qué vivir.

Pero, como lo hemos dicho cincuenta veces de antemano, no es la conversión metálica en sí misma la que pudiera dañar á nadie. Dar por sentados precedentes de esta naturaleza, es situar incorrectamente estas discusiones. Todos, pobres y ricos, duplicaríamos en el acto y, como tocados con varilla mágica, nuestras economías y nuestros ahorros, si pudiéramos contarles *en oro* aún cuando fuese del *hechizo* y artificial de los 24 peniques.

Es otro muy distinto el terreno propio de la dificultad que viene dividiéndonos.

Lo único que debería discutirse, dentro de los límites útiles y serios de esta controversia, no es, por cierto, si el circulante de oro es mejor que el de papel, porque eso es simplemente una *perogrullada*, sino si es oportuno, si es discreto, si es ajustado á los principios de la ciencia y á los resultados de la experiencia universal; proceder á la conversión del papel por moneda metálica, en las circunstancias actuales del país.

Nosotros afirmamos y creemos haber demostrado hasta la redundancia:

Primero, que el oro canjeado contra nuestro papel de 12 peniques, se escaparía del país junto con lanzarle á la circulación;

Segundo, que para llegar á los canjes, sería necesario afrontar previamente la falencia necesaria de todos los establecimientos de crédito del país;

Tercero, que las acumulaciones de oro hechas por medio de las aduanas, sea á la entrada ó á la salida del país, mantienen artificialmente abatido el tipo de los cambios con todas las desastrosas consecuencias que este fenómeno acarrea;

Cuarto, para producir tan estériles y tan penosos resultados, se ha puesto al país una camisa de fuerza, que

ahoga su desenvolvimiento, que le empobrece y que acabaría por arruinarle;

Quinto, que todo este mecanismo ficticio y arbitrario, nos aleja enormemente en vez de acercarnos á la circulación metálica; y

Sexto, finalmente, que no hay más medios probados y positivos de enriquecer al país, que cortar las cuerdas con las cuales se le tiene atado, derogar lisa y llanamente las leyes del 92 y 93, economizar las rentas extraordinarias y cuantiosísimas del salitre, formando con ellas la gran reserva nacional, protejer por medio de la legislación aduanera, discreta y prudentemente, la implantación y el desarrollo de las industrias fabriles y, sobre todo y ante todo, apropiarnos la riqueza salitrera, declarándola *de exclusiva utilización* de la industria chilena.

Combatan, contradigan estas conclusiones los que las consideren inexactas ó paradójicas.

Esa es tarea útil, así como es de infructífero pretender rehuir con argumentos impresionistas ó con imposiciones de autoridad, la amplia dilucidación del problema que más honda y más vivamente afecta al país.

XII

Es peculiar condición de los problemas que analizamos, ofrecer espejismos engañosos al ojo más penetrante cuando no se les contempla desde un punto de mira adecuado ó cuando se pierde el conjunto como objetivo y se presta atención ó se exajera la importancia de los detalles.

Es así, por ejemplo, cómo espíritus muy ilustrados han creído posible y útil, no ya el régimen de las leyes del 92 y 93 que estiman irrealizable, sino la conversión del actual circulante fiduciario *á moneda de plata.*

Hay quienes han propuesto esta forma de conversión, en moneda de plata de veinticinco gramos de peso y nueve décimos de fino.

Otros, más modestos, desearían que se adoptara, con este efecto, el peso de veinte gramos que equivaldría á un cambio, más ó menos, de diezinueve peniques y medio.

Por cierto que ni la una ni la otra de estas combinaciones, contaría con el apoyo de los monometalistas autores ó inspiradores de las leyes del 92 y 93.

A juicio de estos últimos, sería un absurdo que el país no aprovechara de la coyuntura que le ofrece la circunstancia de carecer de toda *especie circulante*, para elejir ó para adoptar la *mejor*, la más preciada, la que nos colo-

que al nivel de los mercados más florecientes y próperos en el comercio universal.

Como lo hemos dicho en ocasión anterior, esta manera de contemplar el problema monetario, no tiene más inconveniente que el exceso mismo de su bondad, ya que el más poderoso enemigo de *lo bueno* es siempre *lo mejor*.

Es manifiesto que cuando la condición económica del país le permita tener circulante monetario, sin recurrir á los artificios violentos del empirismo, habremos de comenzar por *la plata*, que es el metal más barato, el que produce la industria nacional y el que nos ofrece más relativas probabilidades de ser retenido en nuestros mercados.

No significa esto que hubiéramos de renunciar *in eternum* á la moneda de oro.

Mucho menos significa que desconozcamos los inconvenientes que tiene la falta de fijeza en el valor actual *de la plata*, para hacerla servir de moneda.

Lo único que se desprende de estas afirmaciones, es que siendo tan largo el camino que debemos recorrer para cimentar y arraigar en nuestros mercados el circulante de oro, la más elemental prudencia y previsión, aconseja hacerlo por jornadas.

Como dice Claudio Jannet, "el oro es la moneda *internacional*: la plata es una moneda *secundaria* para *los países* ricos, pero es *la moneda interna de los países pobres*."

Hemos de comenzar, por lo tanto, con el circulante *plata* cuando suene la hora de abandonar la moneda fiduciaria, porque así lo indique la cotización de los cambios y sólo cuando cesen por completo las perturbaciones económicas que nos aquejan, cuando el país se haya enriquecido por la producción y el ahorro, cuando restablezcamos el equilibrio de la balanza comercial; llegará

naturalmente el momento propicio de traer «la moneda *internacional,*» ó mas bien, llegará el día en que esa moneda venga por sí sola atraída por las corrientes del comercio que la colocan siempre allí donde tiene oficios remunerativos y útiles que desempeñar.

Entre tanto ¿qué avanzaríamos, *hoy por hoy*, con cambiar nuestro papel, como viene proponiéndoselo, por una moneda de plata de *veinte gramos* de peso y nueve décimos de fino?

Desde luego es evidente que para la industria minera nacional, esta medida no habría de traerle el más insignificante beneficio.

La minería chilena vende ó *exporta* su *plata* al mismo precio que se la pagaría la Casa de Moneda para acuñarla.

Lo uno le significa lo mismo que lo otro y, en este sentido, la idea que analizamos carece de todo interés.

Ahora, por lo que atañe á los efectos propiamente *económicos* de esta conversión, es manifiesto que, por el momento, á lo menos, serían perturbadores y dañinos.

La plata que el Estado adquiriese para la acuñación sería un valor arrebatado á los retornos del comercio de intercambios y en tanto cuanto ascendiese ese valor, reagravaríamos los déficits y las dificultades de la actualidad económica nacional.

Ni habría tampoco necesidad de añadir que, aun cuando en escala muy inferior, subsistirían con una moneda de plata de 19 á 19½ peniques, los peligros que, con caracteres mucho más manifiestos, ofrece la moneda de oro creada por ley del 92.

Persistiendo la cotización de los cambios al derredor de sus tipos actuales, la moneda de plata de 19d, *se exportaría*, á lo menos, en parte muy considerable.

De suerte que, en definitiva, la idea propuesta está llamada, ante todo, á dañar el movimiento de nuestros

intercambios, sin favorecer en modo alguno á la industria y con peligro de que, aún esta moneda feble, nos abandonara después de incinerado el papel ó de que, para retenerla artificialmente, fuese necesario elevar los intereses, como está aconteciendo en el Perú, hasta tipos de usura y de ruina para el país.

Ahora, si lo que se prometen los sustentadores de esta idea, es sencillamente utilizar de alguna manera las reservas formadas á mérito de la ley del 92, movilizar esos considerables valores que hoy se mantienen en absoluta esterilidad, convirtiéndoles en una moneda *exportable* que aumente la masa de los artículos de retorno, no habría en tal hipótesis, objeto alguno útil en mellar á pura pérdida los cuños de la casa de amonedación. Se alcanzaría este mismo resultado girando sobre Europa á cargo de los valores en letras que conservan las tesorerías fiscales, ó bien, remesando las mismas libras esterlinas ó las pastas y barras de plata que guardan los cofres del Estado.

La utilidad de una operación de esta naturaleza, dependería, por lo demás, de las aplicaciones que se dieran á los fondos así movilizados.

Si se tratara, por ejemplo, de formar con esos fondos una reserva colocada en Londres y representada por los títulos de nuestra propia deuda externa ó por otros efectos públicos de análoga solidez y rendimiento, nosotros no tendríamos sino aplausos para tal medida.

Pero, si á la inversa, las reservas actuales de la conversión se hubieren de girar sin producir otro efecto benéfico que un aumento transitorio y momentáneo en el tipo de los cambios y colmando, con su producido en billetes, las arcas fiscales; consideraríamos deplorable la operación y opinaríamos por que no se innovase el actual estado de cosas que siendo bastante malo, es, sin embargo, muy preferible al que se crearía en la hipótesis relacionada.

No hay, por lo tanto, nada de bueno que esperar de la idea que analizamos.

Estimada esa idea como un medio de alentar ó beneficiar á la industria minera, sus efectos son nulos. Para la minería chilena es igual vender sus metales al comercio, como artículo de exportación, que entregarles á la Casa de Moneda para que sean sellados y sirvan de circulante.

Económicamente considerada la indicación que analizamos, daría resultados contraproducentes, porque es elemental que si destinamos á desempeñar oficios de circulante á la plata que se produce en el país, dejaríamos un hueco tan hondo como su importe total, añadido al que hoy existe en el movimiento de nuestros intercambios.

Contemplada, por fin, la propia idea en análisis como un recurso destinado á movilizar las reservas de la conversión haciéndolas servir de valores exportables, resultaría ser un recurso caro é inútil porque, para este efecto, no habría necesidad de reducir esos valores á moneda desde que podrían utilizarse en su forma actual.

No es dable desentenderse tampoco, aún haciendo absoluta prescindencia de las consideraciones expuestas, de que la acuñación de piezas de plata de veinte gramos, tendería, de una parte, á corroborar la propensión *á singularizarnos* que viene revelando nuestras leyes, sin que ganara apreciablemente la calidad del circulante nacional.

Ya la ley de 1892 nos había llevado *á la novedad* de rebajar el valor intrínseco del oro para hacer posible la conversión.

Era nuestro país *el primero en el mundo* que recurría á este arbitrio insólito, á este recurso artificial y especialísimo.

No se conoce otro precedente de tal naturaleza en toda la historia económica universal, porque si bien es cierto

que en Austria *se propuso*, dos años atrás, rebajar *en un 16%* el precio del gulden, para cuando se volviera á los pagos en especies, fué en consideración á que era conveniente amoldar el *valor legal* de esta moneda con *su valor comercial*, alterado por la depreciación de la plata. El informe de la comisión facultativa que aconsejaba esta medida, ha quedado hasta hoy sin aprobarse por el Congreso austriaco. Pero las consecuencias que de este precedente aislado pudieran derivarse, lejos de dar autoridad *á la idea de rebajar el valor efectivo y comercial* de las especies destinadas á servir de circulante, demuestra, por el contrario, que si se perseguía el propósito de dar al gulden austriaco un valor *de dos francos diez céntimos*, en lugar de la *relación legal* de dos francos cincuenta céntimos, era porque ese primer valor guardaba consonancia estricta entre el peso y la ley de fino de aquella pieza, con el precio *comercial* del metal que contiene.

Pero, hemos de repetirlo, jamás por jamás, país alguno de los que han pasado por estas transiciones del régimen de circulante, ha imaginado, ni muchísimo menos ha resuelto, auxiliarlas ó apresurarlas, *disminuyendo el valor real y comercial de las especies metálicas* que habrían de reemplazar al papel.

En 1821, la Gran Bretaña pasó del curso forzoso a sus antiguas libras y chelines de ley y peso invariables.

La Francia en 1877, pasó del curso forzoso de los billetes del banco de su nombre, á sus antiguos napoleones y francos.

En 1879 los Estados Unidos volvieron á sus águilas y á sus dollars, dando término al curso forzoso de los greenbacks.

La Italia en 1883 renovó la circulación de sus escudos y sus liras con toda la integridad de su valor.

Todo esto se ha podido hacer y se ha hecho porque en los países indicados, *únicos* que en la historia econó-

mica contemporánea han pasado del circulante fiduciario al de especies, las *conversiones* han sido realmente tales, es decir, no se han intentado ni verificado sino cuando las cotizaciones de los cambios se tocaban con el valor del papel convertido.

Fué así, por ejemplo, cómo en Inglaterra el cambio llegó *á la par en agosto de 1819* y el restablecimiento *legal* de los pagos en especie no se inició sino en 1821.

Lo propio pasó en Estados Unidos, como hemos tenido ocasión de recordarlo en otra oportunidad. Seis meses antes del 1.° de enero de 1879, día fijado para el restablecimiento de los pagos metálicos, el oro y el papel valían *comercialmente* lo mismo y así se explica el fenómeno de que coincidiera con la circulación metálica una masa de 346.000,000 de pesos en greenbacks que *hasta el día de hoy* están desempeñando oficios de circulante.

Con la experiencia de estos resultados palpables y manifiestos, la Italia levantó el tipo de los cambios en 1883 mediante á dos empréstitos, exterior el uno é interno el otro, hasta ponerlo á la par con el papel y sólo cuando ese resultado se hubo obtenido, cuando se creyó posible la permanencia, á lo menos, *temporal* del nuevo circulante, se inició el cambio de régimen y se abolió el curso forzoso.

Estaba reservado á nuestros economistas y legisladores, la iniciativa y el privilegio de hacer estas conversiones ficticias, que comienzan por caricaturar el sistema monetario del país á fin de rebajarle hasta un nivel que se considera compatible con la permanencia de la moneda en los mercados nacionales.

Esta fué la razón de ser de la moneda de los 24 peniques.

Se ha visto que á influencias de las condiciones económicas *naturales* del país y á influencias también de

las medidas *artificiales* y arbitrarias que se imaginaron para auxiliar el sistema, no ha sido suficiente reducir *á la mitad* el valor real del oro que debía servir de circulante y hoy sería necesario rebajarle *á la cuarta parte* para que, coincidiendo con la cotización de los cambios, pudiéramos tener expectativas fundadas de conservar esa moneda.

En esta vez, como siempre, resultan burlados los arbitrios ficticios que pretenden contrariar el curso *natural* del movimiento económico.

Después de estas experiencias, parecía natural que no se insistiese en combinaciones análogas.

Tratándose todavía de amonedar plata, que es un circulante depreciado por su propia naturaleza en los mercados universales, no convendría que disminuyésemos *legalmente* el valor de un metal ya *comercialmente* muy abatido.

El Perú mismo, después de la desmonetización de su papel moneda, pasó á tener circulante de plata de ley y peso común.

No convendría que *singularizándonos* de nuevo, fuésemos el único mercado del mundo con moneda *feble* hecha de un metal *depreciado*.

Es menester, sobre todo, que levantemos alguna vez la verdadera concepción científica de estos problemas, para que sin preocuparnos de los efectos nos preocupemos *de las causas* de estos fenómenos que pasan á nuestra vista.

Es un error, que se hace ya indisculpable, creer que dominaríamos y fijaríamos el mercado de los cambios, procurándonos una pieza metálica cualquiera de valor estable á la cual atribuir oficios de circulante.

Si esa pieza vale *comercialmente* más que el tipo de cotización de nuestros cambios, es evidente que se nos

escaparía de la mano burlando los sacrificios que hubiéramos hecho por adquirirla.

Es aquello de empecinarse en estar llenando de agua un cesto sin fondo.

La única preocupación, la única tendencia discreta de nuestra política, el único objetivo digno de los esfuerzos y de los estudios de gobernantes, publicistas y economistas; no es, por lo tanto, afiebrarse en la tarea efímera de darnos un circulante monetario cualquiera, sino perseguir la más levantada, más util y más patriótica; de mejorar la condición económica del país.

Si hubiera de buscarse una fórmula verdaderamente característica de las preocupaciones dominantes en esta materia, nos la suministrarían los que condenando como radicalmente irrealizables y dañinas las leyes del 92 y 93, se oponen, no obstante, á su derogación absoluta, porque afirman que, cuando menos, debiéramos mantener *el propósito* de llegar á la circulación metálica.

¿No es, en realidad, algo de incomprensible esto de mantener *propósitos* escritos en leyes?

Es tan manifiesto que todos conservamos el *propósito* de llegar al circulante de oro de 48 peniques como el que con igual sinceridad abrigamos de conservarnos en la más perfecta salud.

Y, sería, en efecto, una verdadera extravagancia, el que hallándonos enfermos, no nos preocupásemos tanto de curarnos como de hacer declaraciones solemnes, constantes de instrumentos públicos, de que tenemos el *propósito* de alcanzar el restablecimiento de las fuerzas y vitalidad perdidas.

XIII

No requieren, á nuestro juicio, más latos desenvolvimientos las conclusiones de carácter subalterno y consecuencial que nos ha cabido el honor de sustentar así en el presente como en anteriores estudios.

La necesidad de poner término inmediato al pago en oro de una cuota de los derechos de aduana, parece que, en estos instantes, no encuentra contradictores, á lo menos, en la forma que dió á este impuesto la ley del 92. Por lo que atañe, ahora, á la reciente proposición ministerial que limita y anula los efectos de esta reforma, reduciéndoles á un simple cambio en el asiento del impuesto en oro, nada tendríamos que añadir á lo que dejamos dicho en el cuerpo de esta carta.

Pasa lo mismo con las ideas de sustitución del billete bancario por el fiscal y con la de formación de las reservas nacionales.

En orden á uno y otro de esos puntos, creemos haber acentuado suficientemente los conceptos que desde tiempo atrás venimos emitiendo.

La última de las conclusiones fundamentales que hemos creído dejar justificada, es la que mira á la urgente é imperiosa necesidad de hacer, sin pérdida de tiempo, *la nacionalización* de la industria salitrera.

Pocas ideas han hecho camino más rápido y más feliz en la opinión pública, que ésta á la cual nos referimos.

En 1888 se presentó, por primera vez, al Congreso, un proyecto destinado á enajenar en subasta pública la propiedad salitral.

El proyecto del 88, como el aprobado en noviembre de 1893, se debía á la iniciativa del Gobierno.

Tuvimos ocasión de combatir en el Congreso la proyectada subasta del 88, como combatimos en la prensa, la propuesta y aprobada en 1893.

En la primera como en la última de aquellas ocasiones, obedecíamos al mismo criterio y representábamos un mismo orden de razonamientos.

No era acto de discreta previsión, entregar al mejor postor la riqueza más pingüe que encerrara el país, porque ese postor tenía que ser el capital extranjero infinitamente más poderoso, más avezado, más abundante y más barato que el nuestro.

De aquí la imprescindible necesidad, la conveniencia manifiesta, de favorecer por la acción de la ley el interés nacional-chileno de esta industria, si deseábamos levantarle hasta las condiciones de vitalidad y de fuerza que exije imperiosamente la condición económica del país.

Tan estrechamente individuales y aisladas eran estas opiniones en 1888, que el proyecto gubernativo que combatimos, fué aprobado, sin más que con nuestro voto en contra, *por la unanimidad del Senado.*

Por fortuna para el país, circunstancias de carácter complejo pero extrañas á la manifiesta y uniforme voluntad del Gobierno y Congreso, impidieron que se llevara adelante, por aquella fecha, la enajenación de la propiedad salitrera del Estado.

De otra manera, careceríamos en estos instantes del único horizonte halagüeño para el porvenir y dentro de

toda probabilidad, no se tendría tampoco memoria de la suerte que hubieren corrido los dineros de la subasta, envueltos por los vientos de borrascas y tempestades políticas que tantos otros millones dispersaran.

Cuando cinco años más tarde se dictó la ley de noviembre de 1893, que autorizaba al Gobierno para llevar á término el propio pensamiento felizmente frustrado en 1888, no teníamos ya el honor de contar con un asiento en el Congreso y hubimos de recurrir á la prensa para renovar nuestras observaciones y nuestras impugnaciones á la desgraciada idea.

En esta nueva oportunidad, la iniciativa del Gobierno aparte del prestigio y de las adhesiones que naturalmente ejerce en un Congreso, contaba todavía en su apoyo con la circunstancia de relacionarse la venta de las salitreras con la afectación y utilización de su precio para llevar á término el proyecto capital de la conversión metálica.

Así se explica que se aprobara en 1893, por considerable mayoría de votos, la nueva subasta, á pesar de que las resistencias de la opinión para dejarse arrebatar las riquezas salitrales por el capital extranjero, tenían ya raíces muy hondas y arraigadas. Supeditaron, prevalecieron sobre este linaje de intereses, las consideraciones que se estimaban más capitales y dominantes, de concluir con el papel moneda y de restablecer la circulación del oro en los mercados nacionales.

De manera que, en realidad, no se discutió en 1893 la conveniencia ó inconveniencia de este pensamiento, porque se le consideraba una necesidad impuesta por el gran propósito de la conversión metálica, al cual todo otro interés debía subordinarse.

Ha sido menester que obrase sobre la conciencia pública un profundo desencanto de los resultados y de las expectativas de la conversión, para que sacudiéndose de

estas influencias letárgicas que la han mantenido adormecida, reclame hoy, con acentuación y uniformidad manifiestas, que á falta del oro que se le había prometido, se le entregue siquiera la utilización exclusiva de la única riqueza nacional que ofrece justificadas esperanzas de alcanzar el restablecimiento de su bienestar y progreso perturbado, de su porvenir gravísimamente comprometido.

Ni era dable que el marasmo y la inercia de la opinión sobre punto tan gravísimo, se prolongase por más tiempo.

El estado de constante y progresiva decadencia de las industrias nacionales y de la fortuna pública, debía despertar el criterio y la opinión del país y llevar sus miradas hacia horizontes más halagüeños y fructíferos.

Era extraño, casi inexplicable, en realidad, que teniendo dentro de nuestra propia casa un verdadero tesoro capaz de restablecer sin tardanza el equilibrio largo tiempo perdido de la condición económica nacional; se le contemplara impasiblemente utilizado y monopolizado por la industria extranjera que iba así absorviendo la vitalidad de este pueblo con los propios recursos que arrancaba de su suelo.

Por fin, el auje de esta industria ha herido los sentidos del país, las numerosas y colosales fortunas que se han levantado á nuestros propios ojos en Tarapacá, han concluído por hacernos comprender que es indispensable buscar y hallar en estas fuentes de riqueza, la prosperidad perdida en los antiguos campos de la actividad nacional.

Si se hallan agotados los ricos veneros metalíferos de las provincias del norte, si los precios del cobre, de la plata y de los trigos; no representan ya sino una mezquina remuneración para el trabajo y los capitales chilenos, es fuerza que se varíe de rumbo y de objetivo y

que se acometa, sin más tardanza, la explotación de los salitres por la acción *exclusiva* y para beneficio también *exclusivo* del esfuerzo y del interés nacional.

Los resultados del remate del 15 del pasado junio y la actividad que más tarde han revelado industriales y capitalistas chilenos para lanzarse á este campo fecundo de acción, prueban práctica y elocuentemente que, aunque tarde, se inicia una era de halagüeñas expectativas para el porvenir económico del país.

Falta, ahora, que la acción discreta y previsora del legislador, despeje el campo de la actividad privada, facilite y allane el camino que comienzan á recorrer nuestros connacionales.

Si hubiéramos de juzgar de los resultados de esta propaganda por el eco que ha encontrado, en las primeras deliberaciones legislativas, esta corriente de opiniones; deberíamos confiar en el éxito, más ó menos próximo, de las ideas que sustentamos.

Con efecto, lo que es el fondo de este pensamiento de *nacionalizar* la industria salitrera, no encuentra contradictores que le impugnen, franca y ostensiblemente, á lo menos.

Se aspira, á lo que parece, con tanta uniformidad como sinceridad, por llegar al logro de la empresa.

Se trepida y se vacila solamente en los medios de realizarla.

Es cierto que se divisan ciertas tendencias aisladas que exajeran de tal suerte las dificultades de este propósito, que le presentan, en el fondo, como una quimera, como una utopia irrealizable.

Respetamos las opiniones, los escrúpulos y aún las meticulosidades de quienes así piensan; por más que sentimos no encontrarles un fundamento bastante serio y justificado.

Nosotros no sabemos, en realidad, cómo es que pue-

da creerse que la nacionalización de la industria salitrera sea, como se afirma por algunos, un propósito tan rudo y tan difícil de alcanzar que constituya, en el fondo, una aspiración sin sentido práctico, sin cuerpo palpable, sin forma posible de realización.

Para no llevar inútil confusión á las ideas, es fuerza comenzar por entenderse sobre el significado de las palabras.

Nacionalizar una industria cualquiera, es sencillamente hacer que sus provechos refluyan sobre los habitantes de un país.

Por consiguiente, para que la explotación de los salitres aproveche á los chilenos, no se ha menester de otra cosa sino, lisa y sencillamente, que el Estado, señor y dueño absoluto de esas sustancias, no las venda, no las arriende ni las done sino á los chilenos; con prohibibición absoluta, so pena de nulidad de los contratos ó concesiones respectivas, de transferirlas á extranjeros.

Si hay algún procedimiento sencillo, expedito y de eficacia absoluta; es el que requeriría la realización de esta idea.

Precisamente se trata de una riqueza *sui generis*, especialísima, que radica en manos del Estado, el monopolio de una sustancia que hasta hoy no se produce en ningún otro país del globo.

Se ha menester, por lo tanto, de muy marcadas inclinaciones á la paradoja ó de un desconocimiento, difícil de explicar, del carácter excepcional de estas riquezas; para declarar quimérica, fantástica, casi absurda; una idea elemental en su fondo y en su forma y que apenas se requiere voluntad para realizarla.

Puede haber diversidad de criterio y de opiniones en orden á los detalles de ejecución, pero estas divergencias serán, en todo caso, nimias como importancia y no al-

canzarán jamás á dar al pensamiento el color de una dificultad insalvable como se pretende apellidarla.

¿Qué importa, en efecto, que para los unos sea preferible la venta, para los otros el arrendamiento de las oficinas y propiedades salitreras del Estado?

Nosotros, por ejemplo, que hemos sostenido esta última forma, estamos lejos de atribuirle el carácter de necesaria ni de absoluta ó *única* hábil, para producir los resultados que se persiguen.

Hemos creído sencillamente que á fin de no arrancar á la industria capitales de considerable importancia por su cuantía y de los cuales el fisco no ha menester para objeto alguno útil, valía más la forma de arrendamiento de los terrenos ú oficinas mencionadas, forma en la cual encontramos explotada esta industria al tiempo de la ocupación de Tarapacá por los ejércitos de la República y que, sobre ser prácticamente conocida como ventajosa, permitiría á nuestros futuros industriales, dedicar al desarrollo de la producción, al mejoramiento de las explotaciones ó á la instalación de maquinarias perfeccionadas; los cuantiosos recursos que de otra manera tendrían que pagar al Fisco como precio de esas propiedades.

XIV

Si se prescinde de las pretendidas *dificultades insuperables* con las cuales se querría entrabar la realización de un pensamiento sencillísimo, quedaría sólo por analizar la fuerza de las objeciones menudas que se han enunciado con idéntico propósito.

Viene repitiéndose, desde tiempo atrás, que es inútil empeñar la acción de la ley en esta empresa de nacionalizar la industria salitrera, porque tales esfuerzos serían impotentes y tropezarían *en el hecho* de no existir en el país capitales que dedicar á la producción y explotación de salitres.

Entretanto, es notoriamente sabido que aún desde los tiempos de la dominación peruana de Tarapacá, eran capitales chilenos los que alimentaban y fecundizaban, en parte considerable, la industria salitrera.

Con posterioridad á la incorporación de esos territorios á Chile, aumentó muy considerablemente la masa de recursos nacionales dedicados al fomento de esta industria.

Para nadie es un secreto que existen en el país instituciones de crédito, relativamente poderosas, que han hecho de la habilitación de los salitreros, el principal ramo de sus negocios.

Sería de saber, si los señores que dan por establecida la falta de capitales chilenos para el fomento de la indus-

tria salitrera, irían en sus afirmaciones hasta aseverar también que si la industria fuera explotada por nuestros connacioles, no hallarían éstos el crédito y los recursos que abierta y largamente se han facilitado á los extraños.

Suponemos que el argumento se detendría ante estos extremos porque, se comprenderá, que los bancos y capitalistas chilenos, habilitadores de salitreros, han hecho crédito *al negocio, á la industria, á los valores que produce, á las responsabilidades que ofrece* y, en manera alguna, á la nacionalidad extraña de quienes hasta hoy la han explotado.

De manera que, no sabríamos nosotros, dónde pudiera encontrar justificación este aserto de que si se nacionaliza la industria, se retirarían los créditos y los capitales chilenos que hasta hoy la han estado alimentando.

Ni caben tampoco semejantes afirmaciones ante *el hecho práctico*, notorio, reciente; que ha patentizado el remate de 15 de junio pasado y que ha corroborado y confirmado la formación, más reciente todavía, de sociedades *exclusivamente chilenas*, que han adquirido valiosas salitreras y que se proponen explotarlas con capitales que no pedirán, de seguro, á los mercados de Londres ó de Hamburgo.

Tenemos la certidumbre de que habría hoy en el país, todos los capitales necesarios para explotar cuantos terrenos quisiera vender ó arrendar el fisco á chilenos, en condiciones de equidad y, con infinita mayor razón, en las condiciones de ventaja y de favor que requeriría el desarrollo de la riqueza pública y que impone una discreta previsión.

No parece tampoco que fuera necesario tranquilizar las meticulosidades de los que piensan que los capitales dedicados á explotar salitres, hicieran falta á los sembradíos de trigo, á la crianza de ganaderías ó á las plantaciones de viñedos.

Es menester fiar un poco más en el criterio y en la acción individual, ya que nadie es mejor juez en materia de intereses que los que les gestionan y les arriezgan en industrias y empresas determinadas.

Si hay quienes piensen que vale infinitamente más hacer salitres que cosechar trigos, si algunos capitales se distrajeran de estas antiguas industrias, que el hábito y la rutina nos hacen considerar como las únicas ó, por lo menos, como las más reproductivas; el hueco que dejasen esos productores, mejoraría la condición de los que persistiesen en las antiguas faenas.

No demos curadores á gentes que no les necesitan y tengamos fe en que cada cual sabrá hacia qué horizontes le conviene dirijir su actividad, sus esfuerzos y sus recursos.

Es, pues, tan inexacto, tan notoriamente desautorizado *por los hechos* este argumento de la falta de *capitales chilenos* para movilizar y explotar la industria salitrera, que lo repetimos y lo aseveramos, habría en estos instantes quienes subscribieran cincuenta ó más millones de pesos, en una empresa destinada, por ejemplo, á la explotación de los terrenos y oficinas situadas al sur de Tarapacá, aún cuando para ello fuese necesario construir de su cuenta una línea férrea que diese fácil y barata salida á los salitres.

La verdad es que este argumento de la falta de capitales chilenos para hacer salitres, no es sino una honesta capa con la cual se cubre el propósito de mantener la *igualdad* en la condición de nacionales y extranjeros en las luchas de la industria.

Es hasta curioso de observar, que aún los mismos que votaron la conveniencia de estudiar una fórmula que conduzca á la nacionalización de esta industria, han hecho salvedades que resguarden sus opiniones en este punto concreto y han ido hasta insinuar que, en su con-

cepto, no deben concederse favores ni ventajas al nacional sobre el extranjero en ésta ni en ninguna otra materia que se relacione con la legislación del país.

¿Qué clase de nacionalización de la industria será entonces la que imaginan estos señores?

Porque es evidente, es claro como la luz del medio día, que en libre concurrencia no hay lucha posible entre el capital nacional y extranjero que compitiesen por la adquisición de terrenos y oficinas salitrales.

Una libra esterlina representa para el capitalista inglés que la posee, *cinco* pesos y ese mismo valor significa, para el capitalista ó el industrial chileno, *veinte pesos*. En términos más técnicos y, por consiguiente, más precisos, el poder de cambio de *cinco* pesos ingleses es igual al de *veinte* pesos chilenos.

Cinco pesos en oro inglés representan para un industrial de esa nacionalidad, un interés de dos y medio *á tres por ciento* y *veinte pesos* chilenos exigen á quien les moviliza industrialmente, un interés *de nueve ó diez por ciento.*

El industrial inglés conoce prácticamente la explotación de los salitres, desde la fecha misma de su descubrimiento; domina, por completo, las exigencias de los mercados de consumo que se hallan dentro de su propio país; tiene muchas más facilidades de entenderse, en condiciones ventajosas, con las empresas porteadoras de salitres por mar y por tierra, que son todas extranjeras y dispone, en fin, de un arte industrial muchísimo más perfeccionado.

En semejantes condiciones, la lucha, la libre concurrencia, es la condenación á muerte de la industria nacional.

Y es menester que los que con tal criterio contemplan estos problemas, no aleguen ignorancia de sus resulta-

dos inevitables, y acepten la responsabilidad íntegra que les cabe por el mantenimiento de la actual situación.

Comprendemos que estos errores se deben, en muchos casos, á móviles generosos.

El espíritu de nuestra legislación, la tendencia de nuestros hábitos y hasta nuestras propensiones de raza; nos han llevado á igualar la condición de nacionales y extranjeros.

Dentro del derecho civil y comercial, esa igualdad ha sido y es absoluta.

Educados en este sistema, se ha creído que la igualdad en el terreno del derecho civil, debíamos llevarla, con idéntica rigidez, á nuestra legislación económica y no han faltado tampoco quienes pretendiesen hacerla extensiva hasta á los mismos *derechos políticos.*

Hay en esto un profundo error contra el cual es fuerza que reaccionemos, por cuanto conduce á consecuencias exajeradas y absurdas.

Se piensa que la conveniencia más fundamental del país, es atraer al capital extranjero que vivifica y desarrolla las riquezas.

No seríamos, por cierto, nosotros quienes combatiésemos la exactitud de la tesis en su carácter abstracto, ni quienes denegásemos los beneficios incalculables que la enseñanza, el ejemplo y los recursos de la industria extranjera, tienen que producir en países incipientes como el nuestro.

Como lo hemos dicho en ocasión anterior, sería una fórmula de barbarie y de retroceso la que propendiera á establecer fronteras que nos sustrajesen del contacto de civilizaciones inmensamente más avanzadas que nos han iniciado en el nacimiento, crecimiento y desarrollo de la industria, del comercio y de la riqueza relativa que alcanzamos.

Pero, de aquí no se sigue, *en manera alguna*, y hácia este punto queremos llamar la atención de las clases dirigentes del país, que nos hallemos en el caso de compartir con el elemento y el capital extranjero, en condiciones de rigurosa igualdad, las escasísimas fuentes de la producción nacional.

Al contrario, la tendencia más acentuada y más universal de la política económica moderna, es esencialmente egoista y utilitaria.

Se admite, se busca y se persigue con afán la ayuda del capital y de la industria extraña, sólo en cuanto produzca beneficios, jamás en cuanto dañe á los intereses nacionales, ni muchísimo menos, en cuanto pudiera acarearles una competencia ruinosa.

Este es precisamente nuestro caso.

El capital extranjero empleado en la elaboración de salitres, lejos de ser útil y reproductivo para nosotros, nos postra, nos debilita, nos arranca á pura pérdida, sin darnos nada y sin enseñarnos nada, la savia y la fuerza que pudieran levantarnos del actual abatimiento económico.

Nos estamos dejando colonizar comercialmente como la Australia, como la India y como algunos de los pueblos de nuestro propio continente, sin darnos cuenta de que somos víctimas de ideas añejas, de falsos mirajes.

Otro y muy diverso es el objetivo hacia el cual debieran encaminarse nuestros esfuerzos.

Como decía recientemente el ministro argentino, Sr. Terry:

"El programa de todo hombre de Estado debiera ser la formación del capital argentino. Mientras nuestros consumos sean mayores que nuestras producciones, mientras que los ferrocatriles, *las grandes industrias, las fuertes empresas pertenezcan al extranjero; la estabilidad da nuestra moneda será una bella esperanza y nada más.*"

Y esta doctrina se proclama en un país que ha pedido *mil millones de pesos* al capital extranjero con los cuales ha operado un maravilloso desarrollo de fuerzas industriales propias que habrán de ser, en breve, eminentemente reproductivas.

No basta, no satisface, sin embargo, los ideales ni las aspiraciones del gobernante patriota é ilustrado; que las fuerzas del capital extraño hayan levantado á cien codos de altura, el progreso y la riqueza de su patria.

Aspira á independizar la industria de la absoluta dependencia y subordinación en la cual la mantiene el capital extranjero y señala estos horizontes como los únicos dignos del verdadero estadista y hombre de Estado.

Si esto pasa allí donde el capital extranjero ha operado prodigios, ha despertado el espíritu y las energías de la industria y ha creado, en fin, anchas fuentes de producción nacional; con infinita mayor razón deberíamos propender nosotros á una igual independencia de ese elemento que no explota industrias reproductivas para el país sino que arranca riquezas mineras, las cuales producidas por el suelo nacional van á fecundizar otras regiones y á incrementar tesoros ajenos.

Se traen de ordinario á la memoria los beneficios que la industria extranjera de salitres ha producido á nuestra agricultura ensanchando la aplicación y el consumo de sus productos y abriéndole mercados más y más vastos cada día.

Se habla también del alto precio que tienen los jornales del trabajador que se incorporan al país y, sobre todo, de los millones que representan los derechos fiscales.

Pero, desde luego, es manifiesto que esos beneficios les produciría, en el propio grado de utilidad y de fuerza, la industria nacional.

Porque si fuesen chilenos los elaboradores del salitre,

el fisco, en primer término, recibiría la misma cuota de derechos y en la propia moneda en la cual se la pagan hoy los extraños, la agricultura conservaría los mismísimos mercados de consumos para sus productos y, lo que es el jornal de los trabajadores, no sólo representaría una igual suma de dinero, sino que este dinero *quedaría realmente en el país*, mientras que hoy le reabsorbe la industria extranjera que lleva á Tarapacá, traídos desde Inglaterra, hasta los artículos alimenticios de consumo obligado para el operario y le arranca, en consecuencia, con una mano lo que le ha pagado con la otra.

La última de las objeciones que levantan los que desearan mantener el *statu quo* de la propiedad salitrera, es la pretendida ineficacia de la ley para alcanzar la utilización *exclusiva* de estas riquezas por el elemento nacional.

No suponemos que fuera necesario manifestar cómo es que no hay nada de más fácil ni de más expedito que *constituir el dominio de la propiedad salitral*, radicándole *exclusivamente* en manos de chilenos. El Estado es el dueño absoluto de los terrenos no sometidos hasta hoy al dominio privado, y es evidente que les venderá, les arrendará ó les entregará en administración ó en explotación; á las personas con quienes *quiera* ajustar estos contratos.

Por lo tanto, bastaría con que la ley dijese, como nosotros creemos que debiera decir, que esta clase de contratos no podrían ajustarse sino con chilenos de origen ó naturalizados, ó con extranjeros casados con chilena y residentes por más de diez años en el país; para que la propiedad quedare constituída y radicada exclusivamente en estas personas.

Prohibiríanse asimismo, las transferencias de estas propiedades á cualquier título ó la cesión de los contratos de arrendamiento, á personas que no se hallasen

dentro de las categorías expresadas y esta prohibición se afianzaría con la sanción de nulidad absoluta de semejantes transferencias ó cesiones.

¿Se cree que fuera fácil burlar estas prescripciones de la ley?

Pues nosotros lo estimamos no sólo difícil sino hasta inverosímil.

El capital extranjero es finamente cauto y receloso y no se arriesgaría, por cierto, en sumas crecidas como las que demandan estas operaciones, sabiendo que el contrato sería declarado nulo y sus dineros serían perdidos en el instante mismo en que se denunciase y se probase su coparticipación en estos negocios.

Aquello de que pudieran hacerse figurar los derechos de extranjeros en nombre ó en cabeza de terceros hábiles para poseerles, es una simple fábula.

Se puede imaginar que se haga confianza absoluta en la lealtad, en la honradez y en la abnegación de uno ó de varios individuos determinados, pero no es dable suponer que esa confianza se transmita á los hijos ó á los herederos de esos individuos.

No se burlarían, por lo tanto, las prescripciones de la ley, y serían, por la inversa, serias, eficaces y respetadas.

Ahora, que fuese inútil, como todavía se ha añadido, una propiedad de la cual no se pudiera disponer con absoluta libertad, es otra idea tan exajerada como inexacta.

Nadie repararía siquiera al tiempo de adquirir ó de arrendar terrenos salitrales, que le estaba prohibido enajenarles, subarrendarles ó gravarles en favor de extranjeros.

La verdad es que esta clase de objeciones se formulan y se prodigan sin gran meditación.

Hay quienes sustentan estas corrientes de resisten-

cias contra la nacionalización de la industria salitrera, porque viven con la mirada siempre fija en los intereses estrechamente fiscales y no se dan cuenta, no conciben y muchísimo menos pudieran aprobar una idea que conduce á que el *fisco* limite el círculo de los interesados y se prive de la competencia de los extranjeros en la subasta de estas propiedades.

Renunciamos á convencer de error á los que insisten en tan extrañas paralogizaciones.

Pensamos que los intereses nacionales no pueden ser contemplados desde tan estrechos puntos de mira.

Pensamos y creemos haberlo demostrado muy ampliamente de antemano, que, económica y políticamente considerada, sería una calamidad para este país la existencia de una riqueza que no pudiese circular y ser asimilada por el organismo nacional como circula la sangre por el organismo humano: vivificándole y robusteciéndole.

XV

Vienen caminando las leyes de nuestro análisis, por los vericuetos más escabrosos.

A poco de haber entrado en vigor, se les salió de todos lados al paso, con empuje y fuerzas sobradas para obstruirles la vía y hacerlas retroceder en su perniciosa marcha.

Pero aconteció, por desgracia para el país, que demostrados hasta la redundancia los errores del sistema, coaligáronse para sostenerle una doble corriente de intereses políticos y de terquedades sectarias, auxiliadas por las fuerzas de resistencia del amor propio comprometido de sus autores.

Se inició, en efecto, una primera y formidable tentativa de reacción, en los comienzos de 1893, ó sea, á los seis meses de dictadas esas leyes.

Pero se acababa de organizar, por aquella época, un Ministerio de coalición, del cual formaron parte muy conspicuas personalidades de la política que tenían opiniones comprometidas en favor del régimen de artificios creado por la ley del 92.

No fué posible, por tal causa, abrir campaña parlamentaria en demanda de modificaciones fundamentales de esas leyes, porque aún sus más decididos adversarios

temían por la suerte de la organización ministerial que todos deseaban mantener, cuando menos, hasta que se verificaran las elecciones de marzo último.

Y, á la verdad, para quienes subordinan los intereses más vitales de la sociedad, que son sus intereses económicos, á las conveniencias transitorias y efímeras, no ya de la política, que tal nombre no merecen, sino del predominio de tales ó cuales círculos personales en el gobierno del país, la situación de 1893 era delicada y en extremo difícil.

El Ministerio que llegaba á la dirección de los negocios en aquellos días, se dió prisa inusitada por declarar en cuanta ocasión solemne pudo presentársele, que «el mantenimiento íntegro de todas y cada una de las prescripciones de la ley del 92, era un propósito inquebrantable del Gobierno y formaba *la base de su política.*»

Se añadió más acentuada gravedad á estas declaraciones, expresando que «la conversión se verificaría *cualquiera que fuese* la condición del país en 1896.»

Quedó así convertido este problema en una cuestión de partidarismo político y con un ultimatum, lanzado antes de todo debate, que debía respetarse de grado ó por fuerza, si se deseaba mantener el gabinete coalicionista.

Penosa y pesadamente se arrastraron así las cosas hasta fines de aquel año.

Pero, fué tal y tan sombrío el cuadro que presentara progresivamente la situación del país, que un movimiento de generosa y patriótica entereza, decidió á veinte diputados de distintas filiaciones y agrupaciones partidaristas, á provocar un debate que rompiese el *statuo quo* impuesto por las declaraciones ministeriales aún á riesgo de quebrantar la situación política.

No fué bien elegida, sin embargo, la oportunidad para provocar ese debate.

El Congreso se hallaba en los últimos días de su fun-

cionamiento en sesiones extraordinarias y todavía en vísperas de su renovación constitucional.

Fué fácil desviar aquella corriente de aspiraciones patrióticas, enredándolas en las telarañas reglamentarias y postergando hasta momento propicio para los designios dominantes, la inclusión de este negocio entre las materias de las cuales podía ocuparse el Congreso.

Sonó seguidamente la hora de las supremas preocupaciones electorales y el problema económico quedó supeditado en lo absoluto por ese tema de tan palpitante y tan absorvente interés.

Pasada la crisis electoral, organizado el actual gabinete, vino, por fin, una palabra de aliento, una hermosa y halagüeña expectativa para los abatidos y olvidados intereses económicos.

Esa palabra era, nada menos, que la del primer Magistrado de la Nación y nos anunciaba patrióticamente en una ocasión solemne, que «la influencia desfavorable que ha tenido en nuestro estado económico la baja de la plata y del trigo y la mala cosecha del presente año, la depreciación del cambio internacional hasta límites no previstos y la desconfianza y tirantez que se han producido en todos los negocios, no son ciertamente elementos propicios para la abolición del curso forzoso.»

Por lo cual añade S. E. que su gobierno «está dispuesto á aceptar y aún á proponer la reforma de esas leyes en lo que sea necesario para aliviar el estado económico ó financiero del país.»

Presentó, en efecto, el Gobierno, cumpliendo con las solemnes promesas que dejamos literalmente trascriptas, un complejo proyecto de reformas.

Ese proyecto lleva fecha de *16 de julio próximo pasado.*

Era de creer que obedeciendo á las declaraciones hechas por el Jefe del Estado, la discusión de las reformas,

debidas á supropia iniciativa, fuera desde ese instante, la preocupación más capital del gabinete.

Entretanto, van transcurridos cerca de dos meses desde que los proyectos referidos se presentaran al Congreso y hasta hoy no se ha reunido siquiera la comisión que debía informarles.—

El Honrable señor Ministro, autor de esos proyectos, no ha requerido tampoco, una sola vez, á la comisión parlamentaria, por el pronto despacho de su informe.

Todo esto sería verdaderamente extraño y casi inexplicable si no hubiera todavía algo de más insólito que nos da la clave del enigma.

Discutiéndose en el Senado la idea de nacionalizar la industria salitrera, háse declarado incidentalmente, pero con énfasis y reiteración marcadas, que, *á juicio del Gobierno*, no se puede innovar en las leyes de conversión, porque dichas leyes importan un compromisio de honor que liga al país á su fiel y estricto cumplimiento.

Estas declaraciones ministeriales *han desautorizado por completo* las declaraciones opuestas de S. E. el Presidente de la República.

El Supremo magistrado de la Nación creía y afirmaba que las actuales condiciones del país no ofrecían «elementos propios para la abolición del curso forzoso,» y, á su turno, los representantes de su política, los porta-voces del pensamiento presidencial ante el Congreso, declaran, á la inversa, que se mantendrá la ley que ordena poner término, en día fijo, al curso forzoso, porque es este un propósito que afecta, nada menos, que á *la honra del país.*

Y, lo que es hasta hoy, la afirmación ministerial viene prevaleciendo sobre la afirmación presidencial.

Los proyectos presentados el 16 de julio, no se han discutido y ni siquiera se han salvado las apariencias

manifestando interés por llevarles á la tabla de las deliberaciones legislativas.

Esta preterición, este verdadero abandono de ideas sometidas por el Gobierno á la deliberación del Congreso sobre materias de suyo graves y urgentísimas, indica á las claras que, á contar desde la fecha del mensaje presidencial de 1.° de junio y todavía, á contar desde la fecha de los proyectos de 16 de julio; se ha producido un nuevo cambio de rumbo en la política económica del gabinete.

Si esta suposición no estuviera sobradamente autorizada por los hechos y por los documentos oficiales de nuestra referencia, la comprobaría y la evidenciaría la circunstancia de no prorogarse las sesiones ordinarias del Congreso.

No tiene, por consiguiente, el Gobierno el menor interés por convertir en leyes sus propios proyectos.

Tiene, al contrario, el manifiesto deseo de postergar todo debate sobre asuntos de esta naturaleza.

Por eso es que se relega hasta el período de funcionamiento extraordinario del Congreso, la ocasión y la oportunidad de discutirles.

Y, como se sabe que en este período extraordinario de sesiones, en el cual ni siquiera existe la iniciativa de los miembros del Congreso, se aglomeran de ordinario, junto con la ley constitucional de presupuestos, infinitos proyectos de carácter administrativo, impostergables; resultará, en definitiva, que triunfa la política ministerial sobre las declaraciones presidenciales y que no se abrirá debate sobre las leyes económicas.

Si estos asuntos no fueran tan serios por su propia naturaleza y por el carácter de las personas que en ellos intervienen, podría creerse que el Ministerio hacía la obstrucción á la iniciativa presidencial, es decir, se obstruía á sí mismo.

Nos sentimos embarazados para ir adelante en este resbaladizo comentario. Temeríamos herir legítimas susceptibilidades de personas á quienes, por lo demás, debemos muy respetuosas consideraciones.

Queremos, por lo tanto, limitarnos á unas cuantas reflexiones con las cuales pondremos remate á este capítulo.

Hay quienes piensan que sería incorrecto, casi informal, discutir siquiera las reformas propuestas por S. E. el Presidente de la República, porque eso importaría barrenar la majestad de las leyes de conversión que son, al fin, leyes de la República y á las cuales debemos respeto y obedecimiento.

Hé aquí una nueva afirmación que preferimos también no discutir porque, en realidad, no es bastante seria.

Si las leyes de conversión fueran orgánicas y constitucionales, todavía nos parece que no habría el menor inconveniente para reformarlas. La voluntad del país, representada por el Congreso y expresada dentro de nuestro mecanismo legal y constitucional, podría mañana convertirnos de república en monarquía, podría declarar que la religión del Estado es la mahometana, podría hacernos aliados de la China en la guerra con el Japón; pero no podría, según algunos publicistas, modificar ni reformar las leyes de conversión por el hecho de que "*son leyes*."

Lo repetimos, es preferible no comentar estos asertos.

Se ve con entera transparencia, en el fondo de todo este tejido de contradicciones, idas y venidas, marchas y revueltas; que hasta hoy no prevalece ningún propósito decidido, ningún criterio acentuado y resuelto en el ánimo del Gobierno, y que si en ocasiones aparenta abjurar sus errores ante las exigencias y ante los lamentos del país; arrastra y obstruye después su propia iniciativa,

porque teme que, falto de base, se derrumbe estrepitosamente el edificio con la primera piedra que se trate de removerle.

Son profundamente lamentables estas vacilaciones y estas contradicciones.

No es, ciertamente, política hábil la que se empecina en luchar contra las evidencias del acontecimiento.

Está ya sobradamente patentizado *por los hechos*, que la conversión, tal como la acordaron las leyes del 92 y 93, es imposible, irrealizable, es violatoria de toda doctrina y de toda enseñanza práctica, es, en resumen, un propósito dañinamente quimérico que el buen criterio del país condena hoy y anatematizará mañana.

Entretanto, se combinan las fuerzas de tres gabinetes sucesivos, con las de *dos* distintos Congresos, para mantener á toda costa la vigencia de aquellos inverosímiles arbitrios.

Y esto por la *única* y exclusiva consideración de que distintas personalidades ministeriales de las que vienen gobernándonos, han comprometido opiniones y amor propio en el mantenimiento del actual estado de cosas y no es dable contrariarlas ni desautorizarlas, so pena de que abandonen la gestión de los negocios públicos.

Deplorable sería, sin duda, este último resultado, pero, francamente pensamos, que los altísimos y vitales intereses del país vinculados á este problema económico, justificarían el sacrificio, momentáneo, por lo demás, de aquellos políticos que se creyeran demasiado comprometidos en esta lucha.

Deténgase un momento, siquiera, la atención de nuestros legisladores, en lo que significa este solo hecho del mantenimiento del actual *tipo de los cambios*.

Contemplen, dentro de las necesidades y de las exigencias estrictamente *domésticas*, de su propia casa, la serie de sacrificios, de estrecheces y de penurias; que

importa para *cada padre de familia* de modesta fortuna, el cambio á 11 peniques.

Piensen, en seguida, siquiera sea un instante, en los transtornos que momento á momento están causando al comercio, al crédito, á la producción nacional, á la fortuna de los ricos y á los ahorros de los pobres, al rentista y al asalariado, al comerciante y al industrial, al hombre de profesión y al jornalero.

Y esta desastrosa situación, creada por los desequilibrios económico-nacionales, pero mantenida y reagravada muy considerablemente por los artificios de las leyes que venimos combatiendo ¿no autorizaría el sacrificio, ó más bien, la eliminación momentánea de determinadas entidades políticas?

Si la suprema misión del gobernante es darnos seguridad y darnos pan, resguardar la vida, procurar el respeto y la eficacia del trabajo, impulsar el desarrollo del poder productivo-nacional; no se concibe la subordinación de estos gravísimos intereses sociales á consideraciones de bandería y de predominio transitorio de tales ó cuales hombres en el gobierno.

Sería ya tiempo sobrado de que la acción política en este país, ganase una mayor utilidad y altura y de que borrándose denominaciones vacías de alcance, histórica ó doctrinalmente consideradas, nuestros partidos, á semejanza de los de la gran República del Norte, se moviesen dentro de este terreno fecundo de las ideas de progreso económico y bienestar social, en el cual caben con holgura todos los hombres y todas las conciencias movidas de sentimientos patrióticos y en el cual se lucharía fructíferamente por el engrandecimiento del país.

Es penosísimo, en realidad, que la actividad política ruede, por completo, al derredor de abstracciones ó de ideas ficticias y arbitrarias.

Es inaceptable que tengamos partidos patronímicos que no se separen de las restantes entidades políticas por la diversidad de sus ideales sino por el recuerdo de que sus hombres predominaron en el gobierno del país en pasadas épocas de nuestra historia.

Se ha menester de muy fina perspicacia para descubrir tendencias *conservadoras* en partidos que vienen implantando soluciones *radicales* en las instituciones públicas y tendencias radicales en otros que proclaman y sostienen doctrinas y leyes verdaderamente *conservadoras*.

Aparte del terreno teológico, del cual se ha alejado, por fortuna, la política, nosotros no sabríamos quiénes son conservadores ni quiénes radicales, porque, en realidad, hallamos completamente reñidos los nombres con los hechos.

Los elementos de ponderación, los tintes medios entre estas dos corrientes políticas *convencionales*, apoyan diversa é intermitentemente á los unos y á los otros, según sea la composición de los gabinetes y el rumbo de los vientos dominantes.

Nos parece que el país tendría el derecho de exigir y los políticos el deber de buscar, ideales más prácticos, más levantados y, sobre todo, más útiles.

Valen más, sin disputa, nuestros hombres públicos que la escena política en la cual todos ellos aparecen agitándose, porque esa escena es pequeña, colonial y mediterránea y porque en el fondo del movimiento de partidos y de círculos, se palpa la esterilidad más absoluta para el bienestar y el progreso del país.

Aquí tiene Ud., señor Gundián, la historia política de la ley de conversión, sirviendo de epílogo á la apreciación doctrinal de sus disposiciones.

Sería para mí tan grato como halagüeño que mi carta

alcanzara á llenar los propósitos que tuvo Ud. en mira al dirigirme la suya que dejo contestada.

Quiera Ud. aceptar, por lo demás, los sentimientos de distinguida consideración de su afctmo. y A. S.

Luis Aldunaté.